San José de Cúcuta, 07 de octubre 2026

NN 00912

NOTIFICACIÓN POR AVISO RESOLUCIÓN NO. RN 01119 DEL 05 de junio DE 2026

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), es la entidad encargada de administrar el Rupta, y de adelantar todas las actuaciones administrativas necesarias para la definición de las situaciones relacionadas con el referido registro, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 28 del Decreto 2365 de 2015, y en concordancia con lo descrito en los artículos 19 y 33 A de la Ley 387 de 1997, reglamentados por el Decreto 640 de 2020.

En ese sentido, la Dirección Territorial Norte de Santander de la UAEGRTD adelantó el procedimiento administrativo para resolver su solicitud de cancelación de una medida de protección en el Rupta, relacionada bajo el número interno de identificación (ID) **1127116**, respecto del predio PARCELA ubicado en la vereda Las Palmas del municipio de Tibú del departamento de Norte de Santander.

Producto de la actuación administrativa, se profirió la Resolución No. **RN 01119 del 05 de junio de 2026**, *"Por la cual procede la inscripción de una medida de protección en el Rupta"*, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.15.6.2.9 del Decreto 1071 de 2015, adicionado por el Decreto 640 de 2020, y los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, mediante oficio con radicado de salida número 20262060079772l del 21 de agosto 2026, enviada al domicilio informado por el titular de la solicitud por medio de citación para notificación **CN 00161** de fecha del 27 de agosto de 2026, se le citó a comparecer a las instalaciones de la Dirección Territorial Norte de Santander para adelantar la diligencia de notificación personal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción/publicación de esa comunicación.

Sin embargo, debido a que no acudió en el plazo descrito y frente al desconocimiento de una dirección o correo electrónico que permitan el envío y recepción efectiva del aviso en físico, la Dirección Territorial Norte de Santander por medio del presente procede a realizar la notificación por aviso en página web de la decisión adoptada mediante la Resolución No. **RN 01119 del 05 de junio de 2026**, *" Por la cual procede la inscripción de una medida de protección en el Rupta"*, en los términos descritos en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

En cumplimiento de la normativa descrita previamente, se suministra como adjunto copia digital del referido acto administrativo, en dieciséis (16) folios. Se realiza la salvedad de que los datos personales del solicitante, su núcleo familiar y testigos declarantes en el procedimiento administrativo han sido protegidos, con base en lo dispuesto en los artículos 29 de la Ley 1448 de 2011, 18 de la Ley 1712 de 2014 y demás normas concordantes.

Así mismo, se informa a la persona notificada que de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el aviso permanecerá fijado en la página web de la entidad y en un lugar público de la Dirección Territorial Norte de Santander por un término de cinco (5) días. La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En caso de encontrarse en desacuerdo con la decisión adoptada podrá interponer el recurso de reposición ante el Director Territorial de Norte de Santander dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir del día en que se consideró surtida la notificación, de acuerdo con lo descrito previamente.

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – <Nombre de la territorial>
<Dirección de territorial – Teléfono Ciudad>. - Colombia
www.restituciondetierras.gov.co Síganos en: **@URestitucion**

De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 numeral tercero de la Ley 1437 de 2011, se informa que de encontrarse de acuerdo con el contenido de la decisión y desear que el acto administrativo quede en firme, puede manifestar la renuncia a términos de ejecutoria frente a la Resolución notificada; en caso contrario y de no presentar recurso de reposición, esta cobrará firmeza hasta el día siguiente al del vencimiento del término para la interposición de este.

FECHA DE FIJACIÓN Siendo las **08:00 am** del 07 de octubre de 2026, se fija el presente aviso por el término legal de cinco (5) días (8,9,12,13 y 14 de octubre de 2026), hasta las **5:00 p.m.** del último día reseñado, a efectos de notificar el contenido del mencionado acto administrativo a quienes no pudieron notificarse personalmente dentro del término estipulado en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

MONICA ANDREA ZABALA CUERVO
LIDER EQUIPO RUPTA
DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

CONSTANCIA DES-FIJACIÓN. Siendo las **5:00 p.m.** del 14 de octubre de 2026, se desfija el presente aviso.

MONICA ANDREA ZABALA CUERVO
LIDER EQUIPO RUPTA
DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

Proyectó: Jonathan Leonardo Diaz Quintero - Abogado Sustanciador RUPTA - Dirección Territorial Norte de Santander
Revisó: Mónica Andrea Zabala Cuervo- Líder del Equipo RUPTA - Dirección Territorial Norte de Santander

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

RESOLUCIÓN NÚMERO RN 01119 DE 5 DE JUNIO DE 2026

1127116

"Por la cual procede la inscripción de una medida de protección predial en el Rupta"

EL DIRECTOR TERRITORIAL DE NORTE DE SANTANDER

En ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 19 y 33 A de la Ley 387 de 1997, el parágrafo 1° del artículo 28 del Decreto 2365 de 2015, el Decreto 1071 de 2015, adicionado por el Decreto 640 de 2020, la Resolución 722 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, estableció que el Incora debía llevar el registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia, informando a las autoridades competentes para que impidan cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelante en contra de la voluntad de los titulares de los derechos respectivos.

Que el Decreto 1292 de 2003, suprimió el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – Incora y mediante el Decreto 1300 de 2003 se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, y a su vez el numeral 20 del artículo 4° del Decreto 3759 de 2009, determinó que el Incoder, asumiría entre otras funciones la de administrar el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta).

Que el parágrafo primero del artículo 28 del Decreto 2365 de 2015, ordenó la transferencia del sistema del Rupta por parte del Incoder en liquidación, a la Unidad de Restitución de Tierras para su administración.

Que mediante la Resolución 722 de 2016, el Director General de la Unidad de Restitución de Tierras delegó en los directores territoriales la facultad para ejercer en cada una de sus zonas las funciones relacionadas con la administración del Rupta.

Que mediante el artículo 84 de la Ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se adicionó el artículo 33 A de la Ley 387 de 1997 estableciendo el procedimiento administrativo especial para la inscripción y cancelación de medidas de protección en el Rupta, indicando que el Gobierno Nacional reglamentaría este asunto en armonía con la Ley 1448 de 2011, como en efecto se realizó por medio del Decreto 640 del 11 de mayo de 2020, "*Por el cual se adiciona el Título 6 a la Parte 15 del Decreto 1071 de 2015, en lo relacionado con el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados –Rupta.*

Que con base en lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 2.15.6.2.4 del Decreto 1071 de 2015, adicionado por el Decreto 640 de 2020, señaló que la entidad administradora del Rupta tendrá un término de sesenta (60) días contados desde que se somete a estudio el caso, para decidir sobre la inscripción o cancelación en el Rupta y que dicho término podrá ser prorrogado hasta por treinta (30) días cuando existan o sobrevengan circunstancias que lo justifiquen.

Que el artículo 2.15.6.1.1 del Decreto 1071 de 2015 establece que el Rupta es un instrumento que les permite a las personas víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia obtener, a través de una medida administrativa, la protección de las relaciones de propiedad, posesión u ocupación sobre inmuebles, que hayan dejado abandonados; para lo cual en este registro se inscribe al solicitante y su relación jurídica con el predio objeto de la medida.

Que, a su turno, el artículo 2.15.6.2.7 del Decreto 1071 de 2015 indica los requisitos para que sea procedente la inscripción en el Rupta.

Que, de acuerdo con el marco normativo descrito, la Dirección Territorial Norte de Santander decidirá sobre la procedencia de la inscripción en el Rupta frente al caso *sub examine*.

ANTECEDENTES

1. El señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, presentó solicitud de inscripción en el Rupta el 1 de febrero de 2025, asociada al número interno de identificación (ID) 1127116, respecto del predio denominado **PARCELA**, ubicado en la vereda las palmas del municipio de TIBU, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**, sin folio de matrícula inmobiliaria y sin número predial asociado.[1]

2. Conforme la declaración rendida de fecha 1 de febrero de 2025, el señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** informo haber iniciado la relación jurídica con el predio objeto de la solicitud, a lo cual señalo:

   "Adquirí el predio hace cinco meses, en noviembre de 2024."[2]

3. Conforme ampliación rendida ante la unidad de restitución de tierras a los 29 días del mes de octubre de 2025, señalo el señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** en cuanto al inicio de la relación jurídica de la siguiente forma:

   "mediante un acuerdo de destrazamiento, y no tengo documentos legales de la propiedad."3

4. Así mismo, el solicitante manifestó que en cuanto al estado físico del predio al momento de la adquisición y que mejoras realizo, define que:

   "Lo dejé en buenas condiciones, con cuatro hectáreas sembradas de plátano, maíz y yuca, además de animales que perdí por el desplazamiento.4

5. En cuanto a los motivos que originan la solicitud de inscripción de la medida de protección señala que:

   "La abogada le pregunta ¿Cuál es el motivo para iniciar este proceso de restitución? Responde: Porque mi predio está abandonado, me han amenazado, y me dijeron que no regrese. ¿En qué condiciones dejó el predio? Responde: Lo dejé en buenas condiciones, con cuatro hectáreas sembradas de plátano, maíz y yuca, además de animales que perdí por el desplazamiento.."5

---

1 ID de documento 6151857 del SRTDAF

2 ID de documento 6151912 del SRTDAF

3 ID de documento 6151912 del SRTDAF

4 ID de documento 6151912 del SRTDAF

5 ID de documento 6151912 del SRTDAF

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
GESTIÓN DOCUMENTAL
Dirección Territorial
Norte de Santander - Cúcuta

6. De igual forma, inicio que Estaba acompañado de un vecino y mi patrón, quien me avisó de la situación y lo me hizo salir del predio.

7. Ahora en cuanto al motivo, voluntariedad y amenazas, el solicitante manifiesta que las condiciones de violencia en la zona, no ha podido volver a habitar el predio, y que no se encuentra presionado o coaccionado por alguna persona para adelantar el trámite de inscripción de la medida de protección6

8. Dentro del análisis de procedencia de la solicitud en los términos del Decreto 1071 de 2015, adicionado por el Decreto 640 de 2020, la Dirección Territorial Norte de Santander adelantó las siguientes actuaciones administrativas:

    a. Formulario de Registro Único de Predios y Territorios Abandonados - Rupta- con el ID 1127116 respecto del predio denominado denominado **PARCELA**, ubicado en la vereda las palmas del municipio de TIBU, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**, sin Folio de Matrícula Inmobiliaria asociado y sin Número Predial.7
    b. Constancia de Requerimiento de Inscripción de Medida de Protección en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados - RUPTA.8
    c. Constancia Secretarial en el que consta la solicitud del señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468.9
    d. Cedula de ciudadanía a nombre de **HUMBERTO QUINTERO SERRANO** No. 12.500.468 de Pelaya,[10]
    e. Ampliación de declaración por parte del señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya del 01 de febrero de 2025011
    f. Formato RT-RG-FO-18 Consentimiento informado y autorizacion para grabacion de audio y video por parte del señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya12
    g. Acta de localización predial elaborado por parte del área catastral de la UAEGRTDAF respecto del predio denominado **PARCELA** del 29 de octubre de 2025.13
    h. Se expidió la resolución RDGN 00347 de 27 de noviembre de 2025: "por la cual se inicia el estudio formal en un procedimiento de inscripción por solicitud de parte"14

---

6 ID de documento 6151912 del SRTDAF

7 ID de documento 6151857 del SRTDAF

8 ID de documento 6153208 del SRTDAF

9 ID de documento 6152049 del SRTDAF

10 ID de documento 6152120 del SRTDAF

11 ID de documento 6151912 del SRTDAF

12 ID de documento 6152186 del SRTDAF

13 ID de documento 6490512 del SRTDAF

14 ID de documento 6542386 del SRTDAF

i. Constancia secretarial en el cual se verifica los intentos de contactabilidad por llamada telefónica con el propósito de tomar ampliación de información.15
j. Comunicación de inicio del trámite RUPTA a terceros publicado en página web16
k. Consulta en la plataforma VIVANTO de la unidad para la atención y la reparación integral a las víctimas – UARIV, con el fin de determinas posibles victimizaciones, consulta de fecha 29 de abril de 202617
l. Documento de Análisis de Contexto del municipio de Tibu, con el propósito de caracterizar integralmente las condiciones sociales del territorio y emitir un diagnóstico sociosituacional que permita comprender las dinámicas de violencia y la evolución del conflicto en la zona.18
m. Consultar en bases de datos de la Policía Nacional a nombre del señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya.19
n. Consulta en la base de datos en el Sistema de Información Interinstitucional para Justicia y paz (SIJYP) y del Sistema Penal Oral y Acusatorio (SPOA) de la fiscalía general de la Nacional, con el fin de conocer si el señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, se encuentra vinculado con alguna investigación, o un proceso penal, en calidad de víctima, denunciante o indiciado o y conocer la conducta punible correspondiente20
o. Consulta en la plataforma de la Superintendencia de Notariado y Registro, por medio del Nodo de Tierras, bajo el criterio de búsqueda por índice de propietarios a nombre del señor **JOSE ASDRUBAL SALAZAR LAZARO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.502.417 de Cúcuta21
p. Actualización del acta de localización predial elaborado por parte del área catastral de la UAEGRTDAF el predio denominado **PARCELA**, ubicado en la vereda las palmas del municipio de TIBU, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**22

1. Revisados los requisitos de procedencia de la solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 2.15.6.2.1 y 2.15.6.2.6 del Decreto 1071 de 2015, la Dirección Jurídica de Restitución profirió la Resolución RDGN 00347 del 27 de noviembre de 2025, *"Por la cual se inicia el estudio formal en un procedimiento de inscripción en el Rupta por solicitud de parte"*.

2. De conformidad con lo ordenado en el artículo 2.15.6.2.5 del Decreto 1071 de 2015 y en la parte resolutiva de la Resolución RDGN 00347 de 27 de noviembre de 2025, la Dirección Territorial Norte de Santander comunicó a los terceros determinados e indeterminados el inicio del estudio formal de la actuación administrativa adelantada frente a la solicitud del ID 1127116, tal como obran los soportes en el expediente con publicación en la página web de la entidad el 20 de abril de 2026.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 2.15.6.2.6 del Decreto 1071 de 2015, adicionado por el Decreto 640 de 2020, la Dirección Territorial Norte de Santander realizo la publicación en página web el dial 27 de mayo de 2026 al señor **JHUMBERTO QUINTERO SERRANO**, el

15 ID de documento 6572312 del SRTDAF
16 ID de documento 6716348 del SRTDAF
17 ID de documento 6716356 del SRTDAF
18 ID de documento 6716372 del SRTDAF
19 ID de documento 6716365 del SRTDAF
20 ID de documento 6723363 del SRTDAF
21 ID de documento 6723369 del SRTDAF
22 ID de documento 6742562 del SRTDAF

COPIA DOCUMENTAL
Dirección Territorial
Norte de Santander - Cúcuta
UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

traslado de las pruebas recaudadas en el curso del procedimiento administrativo, de modo que pudiese controvertirlas, en caso de considerarlo necesario.23

4. Así mismo, el 25 de mayo de 2026 se fijó aviso en la cartelera de la Dirección Territorial Norte de Santander informando el referido traslado probatorio, siendo desfijado el 25 de mayo de 2026, como obra en el expediente de la actuación.24

5. Pese a lo anterior y vencido el término del traslado de pruebas, el señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya no presentó intervención alguna, por lo que se procederá con la adopción de la decisión de fondo correspondiente.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

De acuerdo con los antecedentes relacionados en el acápite anterior, la Dirección Territorial Norte de Santander estudiará la procedencia de inscribir en el Rupta al señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.15.6.2.7 del Decreto 1071 de 2015, el cual estableció los siguientes requisitos:

> *ARTÍCULO 2.15.6.2.7. Requisitos de procedencia de inscripción. La inscripción en el Rupta procederá siempre que se cumplan los siguientes criterios:*
>
> *1. Que se acredite la relación jurídica de propiedad, posesión u ocupación, según corresponda, con el predio que objeto de la medida.*
>
> *2. Que se reúna las condiciones de víctima de desplazamiento forzado, conforme a lo dispuesto el artículo 1° de la Ley 387 de 1997.*
>
> *3. Que la solicitud de inscripción en el Rupta o el inicio de oficio por parte de la entidad administradora del Rupta se haya realizado dentro del lapso de los dos (2) años establecidos en el artículo 84 de la Ley 1955 de 2019, salvo fuerza mayor o caso fortuito.*
>
> *4. Que se identifique el folio de matrícula inmobiliaria del predio sobre el cual se dispondrá a inscribir la medida de protección, si a ello hay lugar.*

En ese sentido, se realizará el análisis sobre la procedencia de la inscripción en el Rupta en relación con dichos requisitos, respecto del señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya y el predio denominado **PARCELA**, ubicado en la vereda las palmas del municipio de TIBU, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**, sin folio de matrícula inmobiliaria y sin número predial asociado.

CONTEXTO DE VIOLENCIA

La agudización y recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo ocurrido durante el primer trimestre de 2025 ha ocasionado un aumento desproporcionado de los hechos victimizantes, daños e impactos contra las comunidades y territorios de esta región fronteriza del país, lo que exigió la expedición del Decreto legislativo 62 de 2025 y 11

23 ID de documento 6750874 del SRTDAF

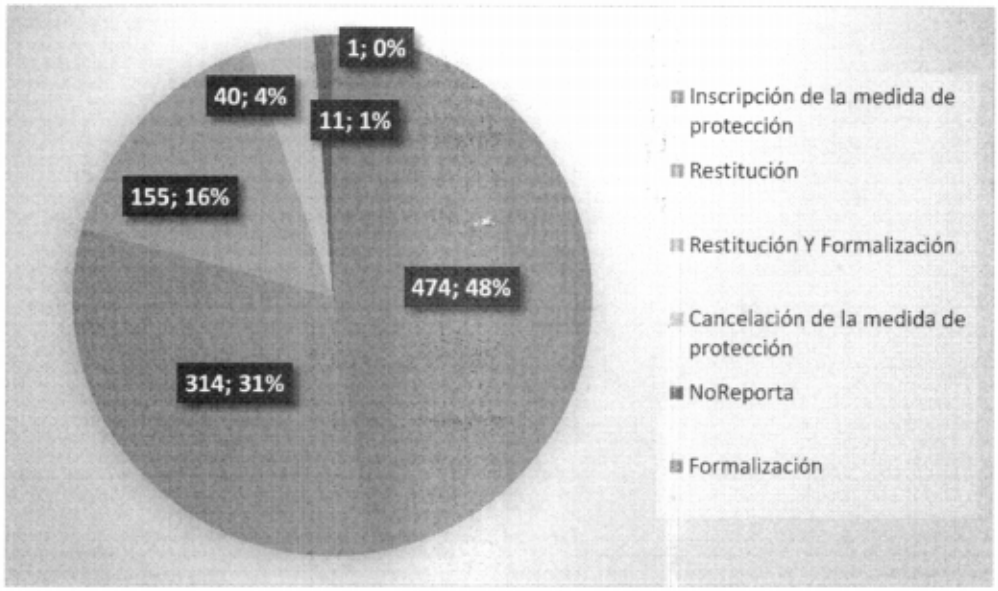
24 ID de documento 6750881 del SRTDAF

decretos subsidiarios, decretando el estado de conmoción interior en el Catatumbo y el área metropolitana de Pelaya, para normalizar la urgente situación de orden público y atender la población gravemente afectada por el desplazamiento forzado de, al menos, 64.783 personas y el confinamiento, en su punto más álgido, de 16.615 personas.

El 24 de abril se suspendió el 'estado de conmoción interior' decretado en la región, sin embargo, se prorrogaron los 11 decretos subsidiarios como mecanismo necesario para garantizar la atención institucional e interinstitucional de la emergencia humanitaria y la implementación urgente y efectiva de la política pública de restitución de tierras y territorios en el Catatumbo.

Durante lo corrido de 2025, y por cuenta de la emergencia humanitaria, la URT ha adelantado sucesivas jornadas de atención de las familias y personas víctimas de desplazamiento, abandono forzado y despojo, y. a corte del 22 de septiembre de 2025, en el sistema oficial de la entidad - SRTDAF se cuenta con 995 solicitudes ante la entidad, discriminadas de la siguiente manera, según el tipo de solicitud:

Gráfica 1. *Universo general de solicitudes en el Catatumbo, según tipo de solicitud*



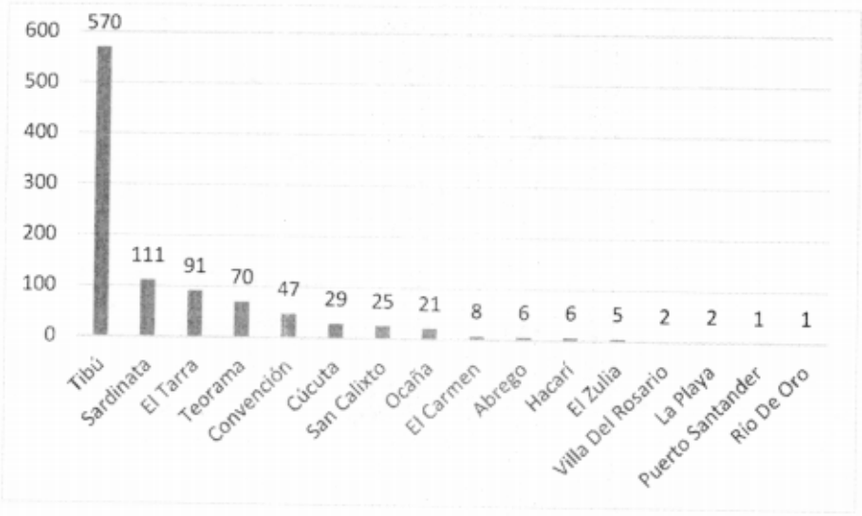
Fuente: Matriz intermisional – SRTDAF (22 de septiembre de 2025)

Como se puede constatar en la anterior gráfica, la mayoría de las solicitudes, 474 (48%), se radicaron para solicitar la inscripción de la medida de protección para el predio afectado; seguido por 314 solicitudes que requerían la restitución de sus predios (31%). En este contexto, la priorización establecida por los decretos de conmoción apunta, efectivamente, a satisfacer las demandas mayoritarias y aquellas que pueden tener una respuesta institucional con mayor eficacia y celeridad, a saber, la inscripción por vía administrativa de las medidas de protección RUPTA.

Por otro lado, un análisis del universo general de solicitudes allegadas a la entidad en el marco de la emergencia humanitaria muestra la siguiente distribución municipal:

Gráfica 2*. Universo general de solicitudes según la ubicación municipal del predio*

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
GESTIÓN DOCUMENTAL
Dirección Territorial Norte de Santander - Cúcuta

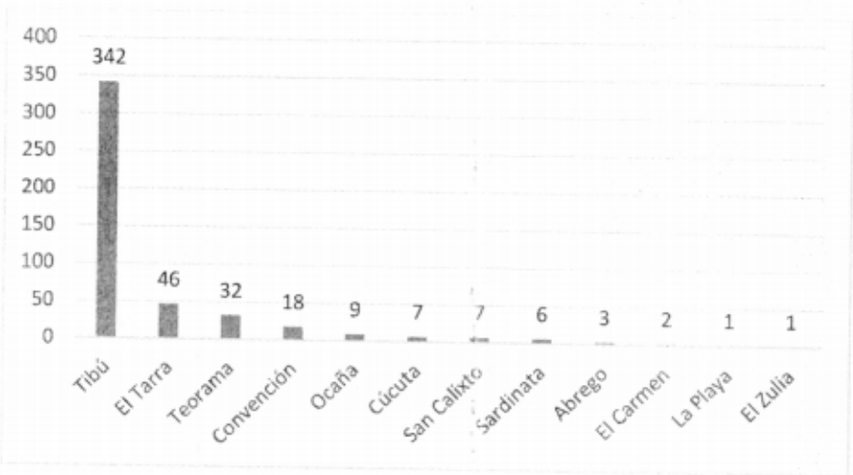


Fuente: Matriz intermisional – SRTDAF (22 de septiembre de 2025)

Como se evidencia, la mayoría de las solicitudes son de predios ubicados en Tibú (570), seguidos en una proporción mucho menor por los municipios de Sardinata (111), El Tarra (91), Teorama (70) y Convención (47). Geográficamente, esta distribución se concentra en el Bajo Catatumbo y en el municipio de Tibú, que hace frontera con la República Bolivariana de Venezuela, lo que reitera la hipótesis de este documento en relación con la ofensiva militar del ELN emanada de si orientación estratégica de construir una retaguardia estratégica en la frontera binacional.

El universo de solicitudes de protección RUPTA (474) se distribuye por municipios de la siguiente manera:

Gráfica 3. *Solicitudes de protección RUPTA según la ubicación municipal del predio*



Fuente: Matriz intermisional – SRTDAF (22 de septiembre de 2025)

Las solicitudes de protección RUPTA presentan una distribución municipal casi idéntica al universo general de solicitudes, a diferencia de Sardinata que, en el caso de las solicitudes RUPTA, se encuentra en la octava posición (6)[25]. En este sentido, Tibú tiene la mayor concentración de solicitudes (342), seguido por El Tarra (46), Teorama

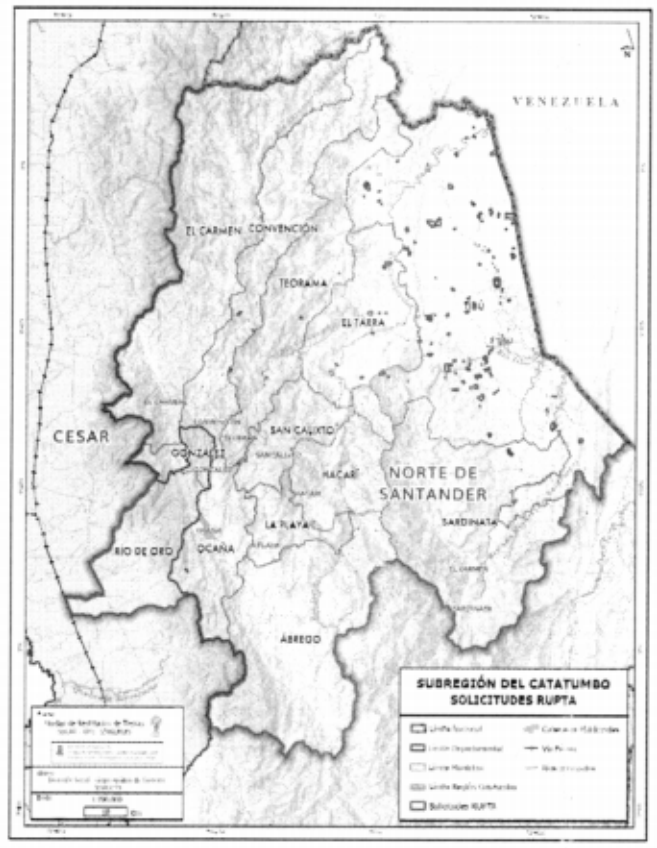
[25] En comparación con las solicitudes de protección RUPTA, Sardinata tiene un mayor peso en el universo general de solicitudes, dado que, según los registros del 22 de septiembre de 2025, para el municipio se presentaron 90 solicitudes de restitución, número que eleva considerablemente su participación global solicitudes.

(32) y Convención (18). Se conserva el patrón espacial de distribución reseñado con anterioridad, ya que las solicitudes se orientan hacia los municipios ubicados al nororiente del departamento y del Catatumbo y la frontera con Venezuela, como se observa en el siguiente mapa:

Mapa 1. *Predios con solicitudes de protección RUPTA en el Catatumbo con polígono preliminar*

Fuente: URT. Grupo de Análisis de Contexto – Dirección Social.

Las solicitudes de protección RUPTA se concentran, principalmente, en los municipios de Tibú (173) y El Tarra (19),

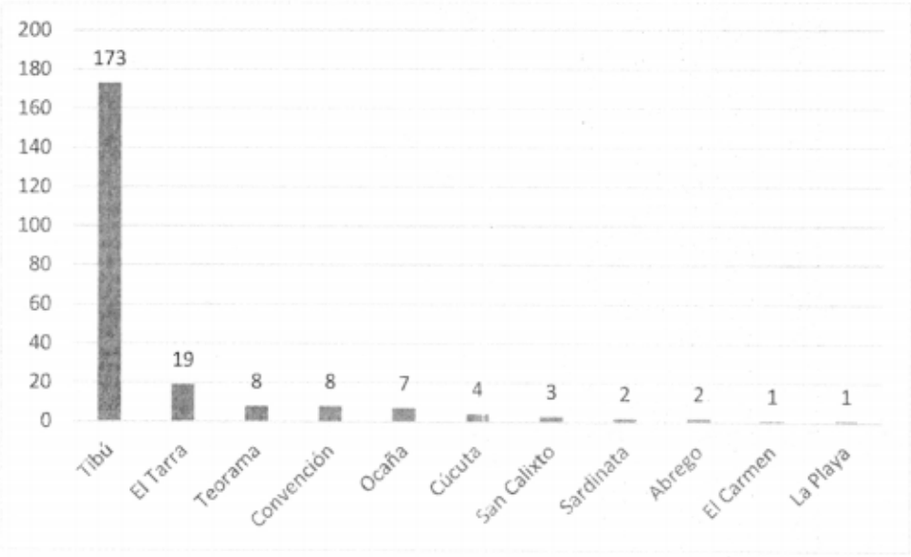


al nororiente de la región del Catatumbo, en las subregiones del Medio y Baja Catatumbo. En Tibú, una gran parte de las solicitudes se encuentren en las tierras bajas y, además, al oriente de la carretera que conduce al corregimiento de La Gabarra, en zonas de alta disputa por el control de corredores estratégicos, los pasos de frontera y el control del espacio binacional de frontera, como se habrá de explorar a mayor profundidad en el capítulo VII. Unas cuantas solicitudes se ubican al norte, en los territorios montañosos del Alto Catatumbo, como las ubicadas en Teorama (8) y Convención (7). Unas pocas solicitudes (5) presentan un alto grado de dispersión y están ubicadas al sur de Ocaña.

De las solicitudes de protección recibidas, para su gestión e inscripción administrativa en el instrumento RUPTA se han priorizado aquellas que cuenten con la información necesaria completa, p. ej., datos de contacto de la persona solicitante y la identificación catastral del polígono del predio a proteger. En estas condiciones, a 22 de septiembre de 2025 hay 228 solicitudes de protección RUPTA con dicha identificación, discriminadas así:

Gráfica 4*. Solicitudes RUPTA con polígono preliminar según la ubicación municipal del predio*

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
DOCUMENTAL
Dirección Territorial
Norte de Santander - Cúcuta



Fuente: *Matriz intermisional – SRTDAF (22 de septiembre de 2025)*

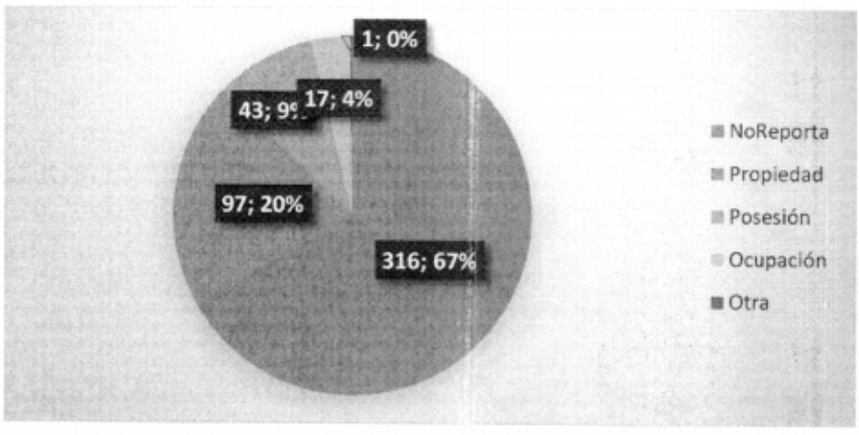
Esta distribución municipal, consistente con la del universo general y la de las solicitudes totales de protección RUPTA, se concentra al nororiente del Catatumbo y del departamento, y en el municipio de Tibú, que incluye la gran mayoría de la frontera binacional de la región.

Del mismo modo, esta distribución espacial de las solicitudes es coherente con la principal hipótesis analítica de este documento: que los eventos de abandono forzado y despojo vinculados a la emergencia humanitaria se encuentran material y geográficamente vinculados al recrudecimiento del conflicto armado regional promovido por el ELN, con el objetivo, entre otros, de la toma militar de la frontera oriental binacional para constituir una retaguardia estratégica que garantice su supervivencia como organización político-militar.

De las 228 solicitudes con polígono preliminar, 2 fueron presentadas colectivamente por la Asociación Campesina del Catatumbo - ASCAMCAT, se trata de un predio en comodato ubicado en Tibú y otra propiedad de la organización ubicada en El Tarra. De las 226 solicitudes restantes, 128 fueron presentadas por hombres y 98 por mujeres.

En otro sentido, al respecto del tipo de relación jurídica del solicitante con el predio, el análisis de las solicitudes de referencia presenta la siguiente distribución:

Gráfica 5. *Solicitudes de protección RUPTA según el tipo de relación jurídica del solicitante con el predio*



Fuente: *Matriz intermisional – SRTDAF (22 de septiembre de 2025)*

Estos son los resultados registrados inicialmente en el SRTDAF en las diferentes jornadas y espacios institucionales e interinstitucionales de atención de las víctimas y personas afectadas por la crisis humanitaria en el Catatumbo. A primera vista, se presenta un panorama jurídico complejo para la resolución administrativa de medidas favorables para las y los solicitantes, en tanto que, una gran mayoría no presentan una relación de propiedad con el predio (80%), condición *sine qua non* para la inscripción administrativa en el instrumento RUPTA.

Una mirada analítica de mayor profundidad muestra, desafortunadamente, un panorama aún más problemático. De acuerdo con la matriz de análisis construida para este DAC[26], para las 68 solicitudes que cuentan con documentación disponible, se ha encontrado la siguiente información vinculada con la relación jurídica con el predio:

Tabla 1. *Afirmaciones sobre relación jurídica con el predio*

Afirmaciones sobre relación jurídica con el predio	**#**
Propiedad	**56**
Carta compraventa	18
Carta JAC	10
Folio Matrícula Inmobiliaria	9
Escritura pública	4
Documento privado	1
Documento Notaría	1
Donación en proceso de legalización	1
(en blanco)	12
Ocupación	**8**
(en blanco)	8
Posesión	**3**
Predio en restitución de tierras	1
Sana posesión - declaración extrajudicial JAC	1
(en blanco)	1
Comodato	**1**
(en blanco)	1
Total, general	**68**

Fuente: Elaboración propia con base en Matriz intermisional – SRTDAF (22 de septiembre de 2025)

Como se puede observar, el 82,35% de las personas solicitantes de protección RUPTA señalan, según los formularios y ampliaciones de su caso, ser propietarias del predio de interés (56), sin embargo, sólo el 25% de ese grupo de personas cuenta con un documento público que pueda demostrar la propiedad (Folio Matrícula Inmobiliaria: 9 solicitudes), Escritura Pública (4), documento Notaría (1). El resto de las solicitudes que aducen propiedad sobre el predio cuentan con documentos privados, 51,78% (carta compraventa: 18, carta JAC: 10, documento privado: 1); en proceso de legalización (1); o no se ha podido identificar en los registros el tipo de documentación de soporte (12).

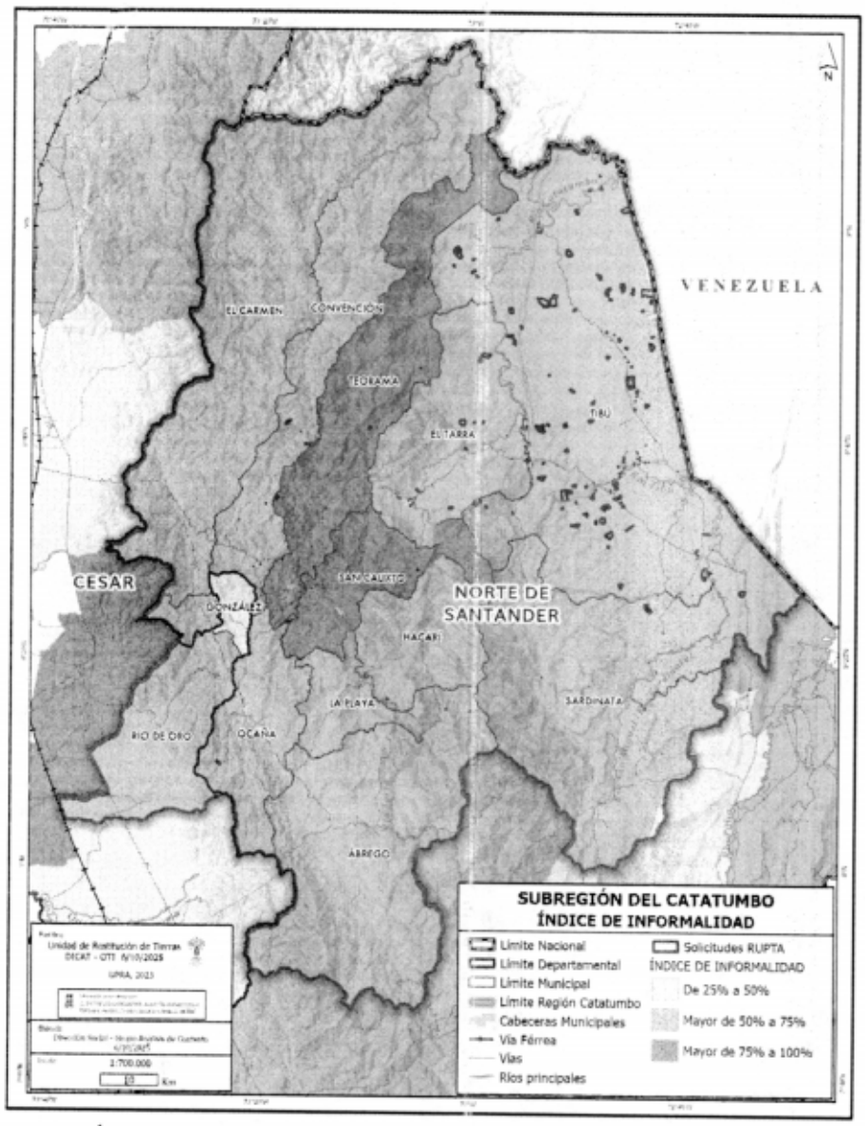
[26] A 22 de septiembre de 2025, a manera de muestra, se revisaron 84 de las 228 solicitudes de protección RUPTA con polígono preliminar identificado. De estas, se sistematizaron cuantitativa y cualitativamente 68 solicitudes que, efectivamente, contaban con la información requerida disponible en el SRTDAF: formularios y ampliaciones de solicitud. A partir de este punto se mencionará este proceso de sistematización y análisis como 'matriz de sistematización RUPTA'.

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
DOCUMENTAL
Dirección Territorial
Norte de Santander - Cúcuta

En relación al total de solicitudes RUPTA sistematizadas, sólo el 20,58% de las personas solicitantes puede demostrar ser propietarias del predio (14 de 68 casos). Este porcentaje es similar al reportado inicialmente en el SRTDAF, es decir, un 20%. Adicionalmente, un 17,64% de las solicitudes reportan una relación de ocupación (8), posesión (3) o comodato (1).

Estas cifras constatan la alta informalidad en relación a la titularidad de la tierra en el Catatumbo, situación que dificulta la labor institucional de la URT en relación a la satisfacción de las solicitudes de protección recibidas en el marco de la emergencia humanitaria.

1.1. Informalidad en la titularidad de la tierra y traslape con áreas de manejo y ordenamiento territorial colectivo en solicitudes RUPTA



Mapa 2. *Índice de informalidad para los municipios del Catatumbo*

Fuentes: UPRA, 2020; URT. Grupo de Análisis de Contexto – Dirección Social

El mapa anterior presenta el grado de informalidad de la tenencia de la tierra rural en el Catatumbo, según el índice de informalidad de la UPRA (2020), un instrumento técnico indicativo construido a partir de la identificación y delimitación de áreas con posible presencia de informalidad desde el nivel predial.

Según su grado de informalidad, de mayor a menor, se presenta el porcentaje específico para cada uno de los trece municipios que componen la región del Catatumbo: San Calixto (86,41 %), Teorama (78,49 %), El Tarra (74,80 %), Tibú (71,66 %), Hacarí (71,54 %), El Carmen (67,53 %), Sardinata (63,44 %), Río de Oro (62,57 %), Convención (60,80 %), Ocaña (59,20 %), La Playa (58,16 %), Abrego (53,35 %), González (32,88 %)[27].

Se observa que, a excepción de González (César), todos los municipios de la región se encuentran con un índice de informalidad en la tenencia de la tierra superior al 50%; los casos complejos de San Calixto, Teorama, El Tarra, Tibú y Hacarí tienen tasas superiores al 70% y rondan el 90% para San Calixto. Estas cifras dan cuenta de la realidad descrita con anterioridad, y, por consiguiente, de las dificultades materiales y jurídicas que enfrenta la URT para hacer efectivas las solicitudes de protección RUPTA para los predios afectados en el marco de emergencia humanitaria.

Tabla 2. *Predios RUPTA según índice de informalidad municipal*

Índice de informalidad por municipio	# Predios RUPTA
Mayor de 50% hasta el 75%	**215**
Tibú	171
El Tarra	23
Convención	10
Ocaña	4
Sardinata	2
Cúcuta	2
Abrego	2
Teorama	1
Hacarí	1
Florián (Santander)	1
Mayor de 75% hasta el 100%	**10**
Teorama	7
San Calixto	3
De 25% hasta el 50%	**2**
El Zulia	2
Total, general	**228**

Fuente: UPRA, URT. Grupo de Análisis de Contexto – Dirección Social

Como se observa, la gran mayoría de predios se encuentra ubicada en municipios con un medio-alto índice de informalidad (50 – 70%), de los que se resalta los 7 predios de Teorama y 3 de San Calixto ubicados en áreas municipales de alta informalidad (75 -100%). Sólo 2 solicitudes, las correspondientes a Zulia, se encuentran en áreas municipales con índices de informalidad bajos.

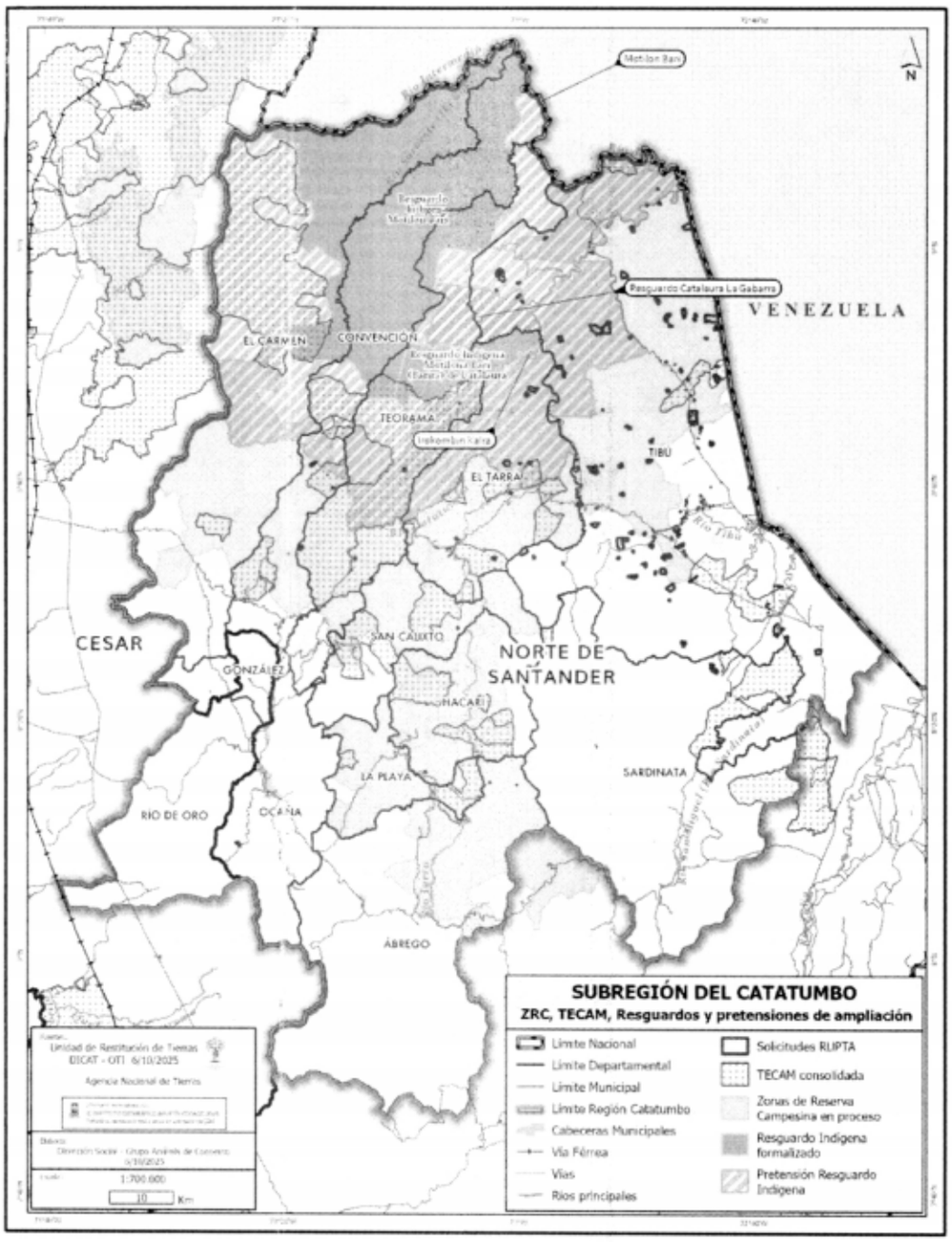
La siguiente cartografía muestra el traslape de los 228 predios con solicitudes RUPTA (con polígono preliminar) con las áreas de ordenamiento territorial colectivo vigentes en la región o en vía de consolidación. De las figuras

[27] Neva, J., y Prada, R. (2023). *Índice de informalidad. Indicador de informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia Vigencia 2020.* Bogotá: UPRA, pp. 48, 58, 59. Acceso el 8 de julio de 2025. Disponible en: https://upra.gov.co/sites/default/files/publicaciones/documentos//indice_de_informalidad.pdf

GESTIÓN DOCUMENTAL
Dirección Territorial Norte de Santander - Cúcuta

reseñadas (Resguardos Indígenas, Territorios Campesinos Agroalimentarios, Zonas de Reserva Campesina), la única que impone restricciones serias para la titulación predial privada o su formalización son los resguardos indígenas.

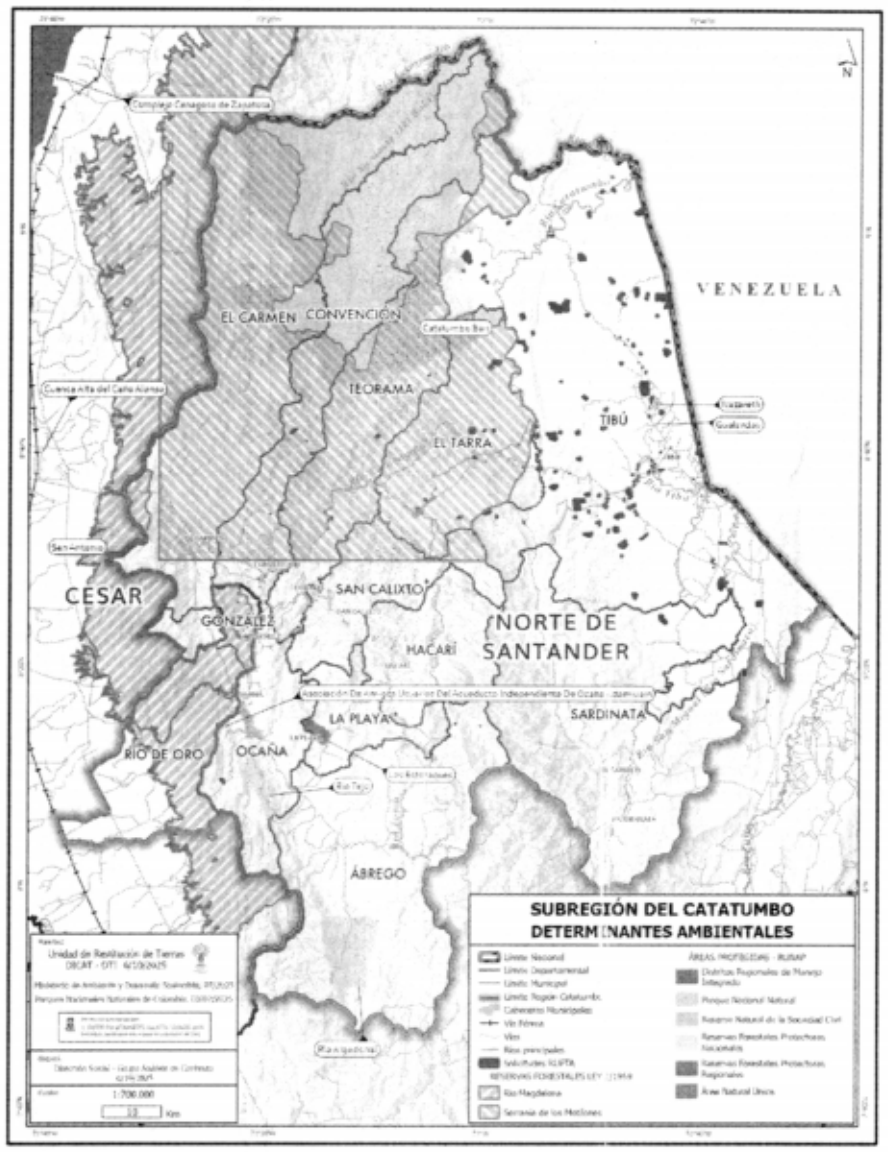
Mapa 3. *Predios RUPTA en Zonas de Reserva Campesina, Territorios Campesinos agroalimentarios y Resguardos en el Catatumbo*



Fuente: URT. Grupo de Análisis de Contexto – Dirección Social

De acuerdo con lo identificado a la fecha, ninguno de los predios con solicitudes RUPTA (con polígono preliminar) está dentro de los dos resguardos ubicados en el territorio (Catalaura y Motilón Barí), sin embargo, 25 ID[28] se encuentran en las zonas de pretensiones de ampliación de dichos resguardos, lo que exigirá la armonización entre estas y los derechos adquiridos por las y los solicitantes de protección sobre sus predios. A su vez, este punto debe ser un eje de estudio a la hora de proferir medidas administrativas favorables para la inscripción pública de los predios objeto de solicitud en el registro RUPTA.

Mapa 4. *Predios RUPTA en Áreas protegidas y zonas de reserva forestal de la Ley 2° de 1959*
Fuente: URT. Grupo de Análisis de Contexto – Dirección Social.



A su vez, el mapa anterior ilustra la ubicación de las 228 solicitudes RUPTA, las áreas incluidas en el Registro Único de Áreas Protegidas – RUNAP y aquellas zonas pertenecientes a las reservas forestales establecidas por la Ley 2° de 1959.

---

[28] ID identificados en el cruce con las pretensiones de ampliación de resguardos: 1125787, 1126902, 1126910, 1127016, 1127028, 1127033, 1127039, 1127059, 1127061, 1127089, 1127105, 1127125, 1127173, 1127307, 1127382, 1127417, 1127591, 1127676, 1127680, 1129722, 1129723, 1130559, 1133849, 1136215, 1136330

DOCUMENTAL
Dirección Territorial
Norte de Santander - Cúcuta

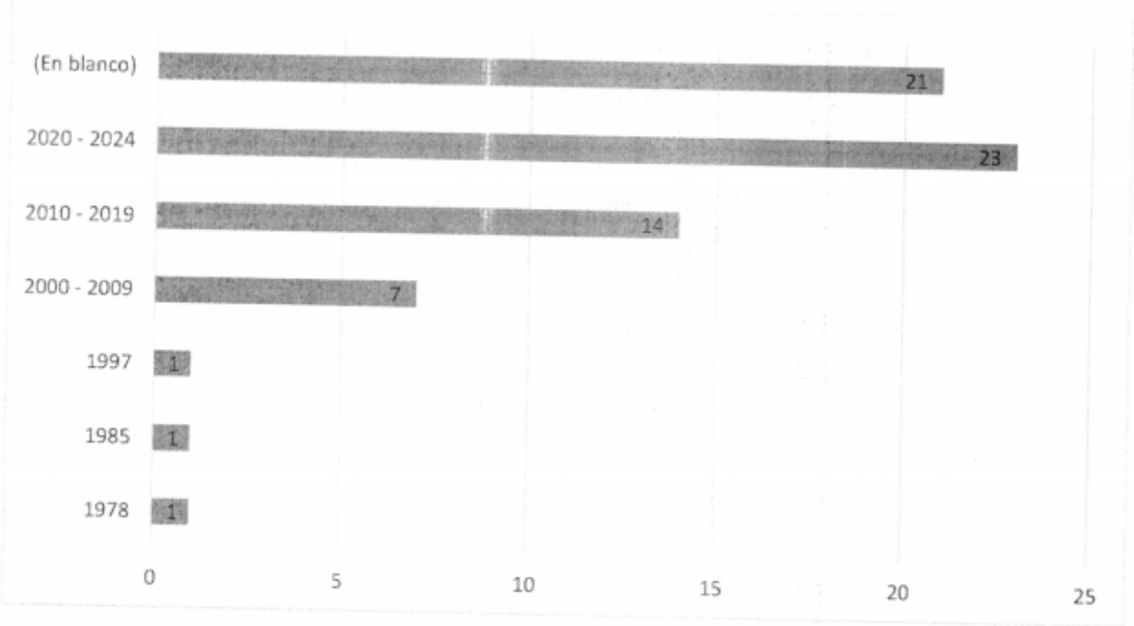
Del conjunto de solicitudes protección RUPTA priorizadas por este DAC, se identificaron tres (ID 1127061, 1127039, 1127059) sobre predios ubicados en el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, lo que implica el estudio riguroso de la preexistencia o no del título sobre el predio antes de la constitución legal del Parque. De ser anterior a la constitución del PNN, los predios privados preexistentes quedan sometidos a un régimen de fuertes restricciones y, en la práctica, la vía más usual es la adquisición por el Estado o el establecimiento de servidumbres o restricciones de uso. De ser posterior, la titulación queda invalidada y se debe entrar al estudio del traslado con o sin compensación[29].

Los cruces con las reservas forestales de Ley 2° de 1959 exigen que, para usos no forestales o para formalizar ocupaciones, se debe adelantar la sustracción previa del área solicitada por la autoridad ambiental[30]. Esto exige el estudio riguroso por el área jurídica de la URT de las 32 solicitudes de protección RUPTA (El Tarra (18), Teorama (8), Convención (5), Tibú (1)) que se encuentran ubicadas en estas reservas forestales para no adelantar la resolución administrativa positiva del registro en el mecanismo RUPTA, sin que antes se haya adelantado la sustracción previa por la ANT.

1.2. Vinculación temporal con los predios, hechos victimizantes y presunta responsabilidad según predios RUPTA sistematizados

Continuando con el análisis pormenorizado de las solicitudes de protección RUPTA con formularios y ampliaciones disponibles a partir de la 'matriz de sistematización RUPTA', se ha podido construir la siguiente gráfica que presenta los años/periodos de llegada y vinculación de las personas solicitantes con los predios de referencia:

Gráfica 6. *Periodos de vinculación con los predios con solicitud RUPTA sistematizados*



Elaboración propia con base en Matriz de sistematización RUPTA

La anterior gráfica constata un patrón temporal de vinculación con los predios relativamente reciente que se concentra en las dos últimas décadas, lo que se puede vincular con las oleadas contemporáneas de poblamiento

[29] Decreto 622 de 1977. Consultado en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8265
[30] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Sustracción de Áreas de Reserva Forestal de Orden Nacional" (s.f.). Consultado en: https://www.minambiente.gov.co/direccion-de-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/sustraccion-de-areas-de-reserva-forestal-de-orden-nacional/

territorial. Este punto se habrá de profundizar en los capítulos relacionados con los patrones de poblamiento, así como con aquel relacionado con la estructura agraria y de tenencia de la tierra. Valga señalar que estos patrones recientes de poblamiento y vinculación con los predios delimita el análisis temporal de las solicitudes, así como el análisis de su relación con los periodos contemporáneos del conflicto armado, en especial, aquellos centrados en los reacomodos territoriales y armados producto de los procesos de dejación de armas de las estructuras paramilitares (2004-2006) y de las FARC-EP (2016-2017), y sus respectivos procesos de reintegración y reincorporación.

En relación con los hechos victimizantes vinculados con el universo de solicitudes de protección RUPTA, las solicitudes con polígono preliminar identificado y las solicitudes RUPTA sistematizadas arrojan la siguiente información:

Tabla 3. *Afirmaciones sobre tipología del hecho en solicitudes RUPTA Catatumbo*

Hecho victimizante	**RUPTA**		**RUPTA con polígono**		**RUPTA sistematizadas**	
Abandono	452	95,3%	212	93%	58	85%
Despojo	16	3,4%	12	5,2%	5	7,5%
Abandono y despojo	6	1,3%	4	1,7%	5	7,5%
Total	**474**	**100%**	**228**	**100%**	**68**	**100%**

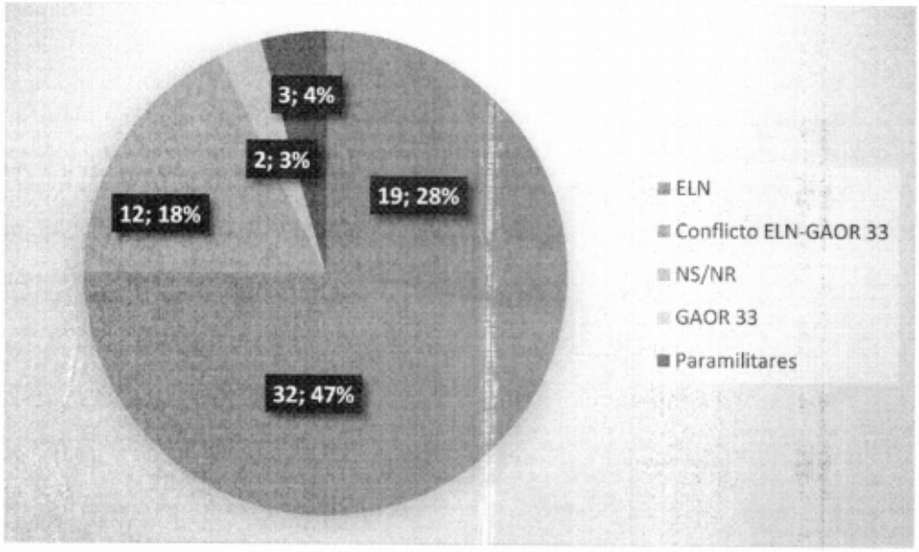
Fuente: Matriz de sistematización RUPTA (Elaboración propia)

Como se puede observar, al reducir la escala de las solicitudes de protección RUPTA evaluadas y sofisticar su análisis cualitativo, aumenta la presencia de hechos victimizantes de mayor gravedad que incluyen el despojo. Al sumar los porcentajes de los hechos de 'despojo' y 'abandono y despojo' podemos ver un paso del 4,7% desde el universo completo de solicitudes RUPTA, al 6,9% de aquellas con polígono identificado, a un 15% de solicitudes que en, sus formularios y ampliaciones, relatan la ocurrencia de un presunto despojo, producto de los dinámicas armadas y acciones violentas ocasionadas por los actores armados involucrados en el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo y la consiguiente crisis humanitaria. Esta tendencia exige el desarrollo de ampliaciones para los casos sensibles y así poder hacer un seguimiento administrativo e institucional, como la evaluación rigurosa de los procedimientos de captura de información y registro de los hechos victimizantes.

El análisis detallado de las solicitudes de protección de acuerdo con la 'matriz de sistematización RUPTA' arroja las siguientes cifras, en relación a los presuntos actores armados responsables de los hechos de abandono y despojo de tierras y territorios ocurridos en el Catatumbo durante el primer semestre de 2025:

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
GESTIÓN DOCUMENTAL
Dirección Territorial Norte de Santander - Cúcuta

Gráfica 7. *Presuntos actores responsables de los hechos de abandono y despojo de tierras de acuerdo con solicitudes RUPTA sistematizadas*



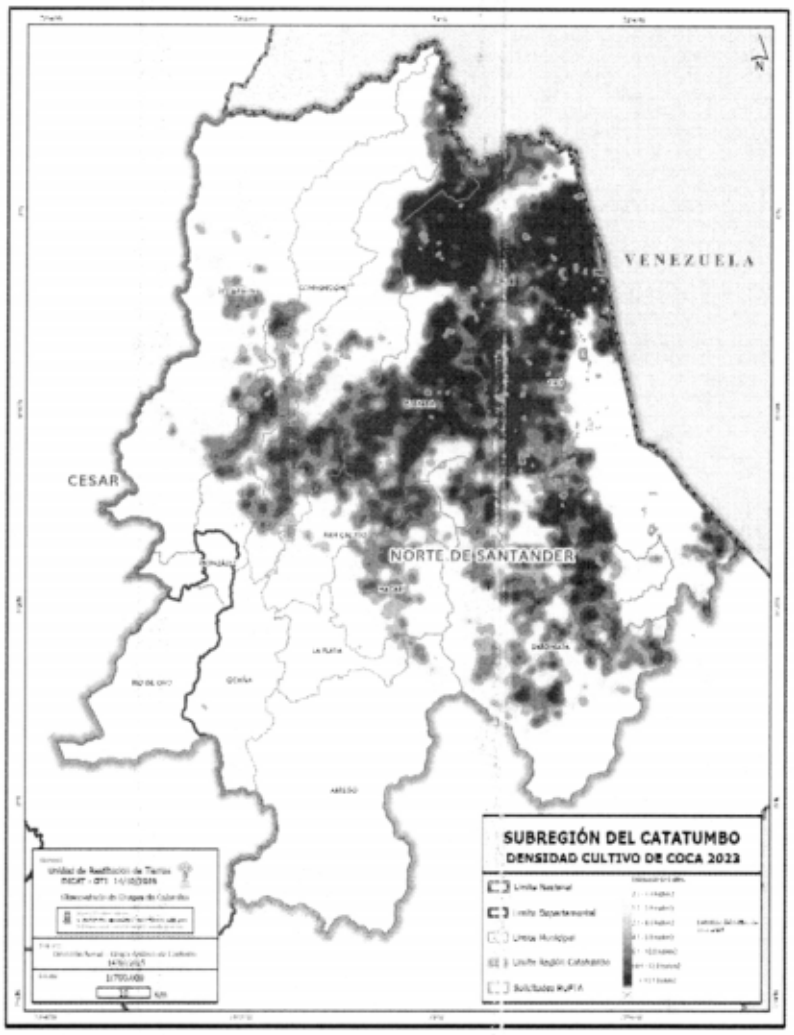
Fuente: Matriz de sistematización RUPTA (Elaboración propia))

Si bien estas cifras se habrán de discutir con mayor profundidad en el último capítulo de este documento, es oportuno señalar que la mayor parte de las personas solicitantes (47%) identificaron los hechos victimizantes ocurridos en el marco de las hostilidades y enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC-EP; seguidas por un porcentaje importante que reconoció directamente al ELN como el autor responsable de los hechos violentos que los obligó a salir forzadamente de sus territorios y/o ser despojados de sus bienes inmuebles (28%). Este porcentaje da cuenta del papel activo que ha jugado el ELN en el recrudecimiento del conflicto armado regional, por causa de su proyecto de retoma militar del Catatumbo, expulsión de los actores armados antagónicos y copamiento socioeconómico y político-militar de sus áreas de control territorial, y de constitución de una retaguardia estratégica a lo largo de la frontera binacional.

Tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, el Frente 33 continuó operando en el Catatumbo bajo el liderazgo de alias *Jhon Mechas*, y gracias a los acuerdos alcanzados con el ELN y el EPL, heredó territorios y cadenas productivas de la economía cocalera. En la práctica, el Frente 33 se convirtió, después del colapso del EPL con posterioridad a la guerra abierta con el ELN en 2018, en el actor dominante de la economía ilícita local: controlaba vastos cultivos de coca —especialmente en municipios como Tibú, el de mayor concentración de coca en Colombia—, dominado rutas de contrabando hacia Venezuela[31]. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, ese grupo se dedicó, de la mano de cuadros medios con alta experiencia en las extintas FARC, a imponer normas de control social (censos, "carnets" comunitarios) y cobrar gramajes e impuestos a los productores de hoja de coca y al comercio ilegal en su zona de influencia[32]. Para el mismo centro de pensamiento, los análisis indican que el Frente 33 antes del recrudecimiento del conflicto armado en la región se financiaba, en buena parte, con extorsiones, secuestros y la venta de cocaína: por ejemplo, en 2021 el jefe financiero apodado "Richard" aumentó los cobros ilegales para sostener la estructura; el Frente 33 había "heredado" la participación de las FARC- en la economía cocalera del Catatumbo y consolidado una red que integraba cultivos, laboratorios, corredores y rutas de frontera[33].

[31] Fundación Ideas para la Paz, *La guerra seguirá en el Catatumbo en crisis* (Bogotá D.C., marzo 2025), 5
[32] Fundación Ideas para la Paz, *El proyecto "Estado Mayor Central" Un intento de unificación disidente*, (Bogotá D.C. 2023),
[33] Fundación Ideas para la Paz, *La guerra seguirá…*, 8

La regulación compartida de la economía cocalera de parte de los actores armados en el Catatumbo ha sido una práctica históricamente documentada, en la que los actores alcanzan acuerdos limitados e inestables de participación y control conjuntos de la economía cocalera, en la que se ha adelantado la distribución de cultivos y territorios, esquemas de producción y venta. Por ejemplo, según in informe reciente de *Global Iniciative Against Transnational Crime*, a partir de 2019 se alcanzó un importante acuerdo económico en el Catatumbo en el que el Frente 33 y el ELN repartieron territorios y rutas. El ELN, dadas sus animadversiones históricas frente al negocio, controlaban zonas específicas de cultivos, laboratorios y rutas de contrabando, lo que mantuvo una relativa paz armada, mientras el mercado de coca se encontraba en crisis por los bajos precios de la pasta base y del clorhidrato de cocaína debido a la demanda limitada por la pandemia y la crisis económica global[34]. ***Mapa 13***. *Densidad de cultivos de coca (2023) y solicitudes RUPTA*



Fuente: SIMCI – UNODC (2024), URT (2025)

Sin embargo, estas treguas por el control armado de los territorios y los eslabones de la economía cocalera fueron muy precarias. En 2022 y 2023 el Frente 33 comenzó a modificar esos acuerdos: financió obras sociales con recursos del narcotráfico para buscar apoyo local y ganar legitimidad social y polílica en el territorio, y creó tensiones con el ELN, al intentar retomar parte de eslabones del negocio que estaba ahora en cabeza de los últimos[35]. El proceso de

[34] Global Iniciative Against Transnational Crime, *Catatumbo's cocaine war* (2025). Recuperado en: *https://globalinitiative.net/analysis/catatumbo-cocaine-war/*

[35] Juana Valentina Cabezas, "La arremetida del ELN en el Catatumbo…", 7

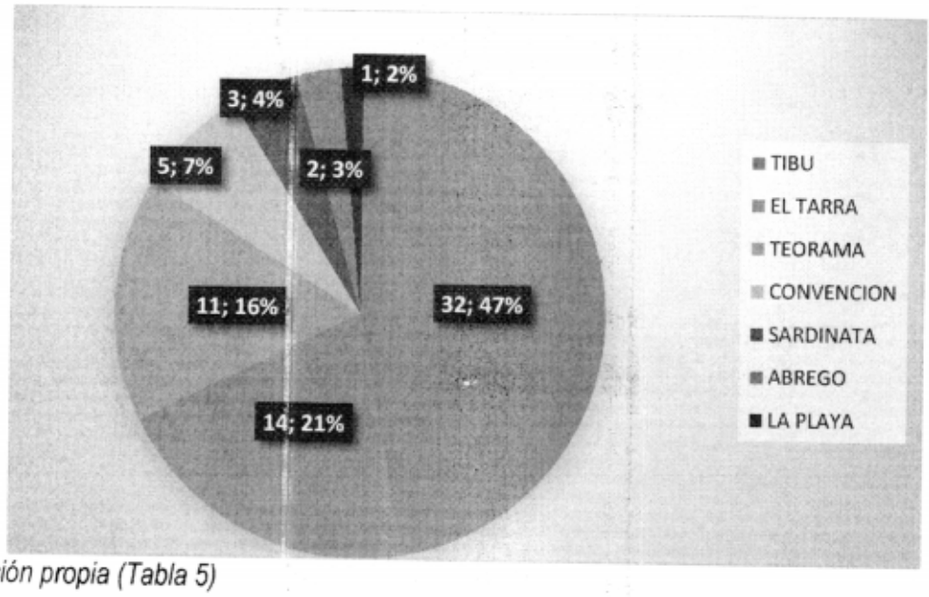
GESTIÓN DOCUMENTAL
Dirección Territorial Norte de Santander - Cúcuta

paz con el gobierno también influyó: en 2024 se acordaron proyectos de "transformación territorial" conjuntos con las disidencias en Catatumbo, lo que fortaleció al Frente 33 ante la población.[36] Al mismo tiempo, el Clan del Golfo amplió su influencia en áreas vecinas (sur de Cesar y Bolívar) y se cree que intentaba ingresar a Norte de Santander[37]. En conjunto, la zona quedó fragmentada: el Frente 33 y el ELN compartían cierto equilibrio de poderes, mientras otros actores (Clan del Golfo, EPL, inclusive, redes criminales mexicanas) rondaban la región. Esta delicada coexistencia sólo se mantuvo mediante precarios pactos locales que habrían de reconfigurarse.

Se presenta una convergencia de los municipios de mayor afectación por eventos del conflicto: Tibú (32), El Tarra (14), Teorama (11) y Convención (5), con aquellos que han presentado las mayores cifras de personas expulsadas y la mayor frecuencia de solicitudes de protección RUPTA con polígono preliminar identificable y georreferenciable. Además, se presentaron 11 eventos de conflicto en los cascos urbanos municipales distribuidos de la siguiente manera: Tibú, 2 eventos (Plaza de Mercado; Batallón Ingenieros No. 30), El Tarra, 7 (Estación de Policía, 5 hechos; Base Militar; Sector del mercado); Sardinata, 1 (Corregimiento de Las Mercedes - Estación de Policía), Convención, 1 (Estación de Policía).

Tal convergencia espacial y contextual da cuenta de una vinculación causal entre estos fenómenos: Violencia generalizada/eventos del conflicto → expulsión/ desplazamiento forzado → solicitudes de protección y restitución ante eventuales hechos de abandono forzado y/o despojo de tierras.

***Gráfico 10**. Hechos de conflicto por municipio de afectación – enero a mayo de 2025*



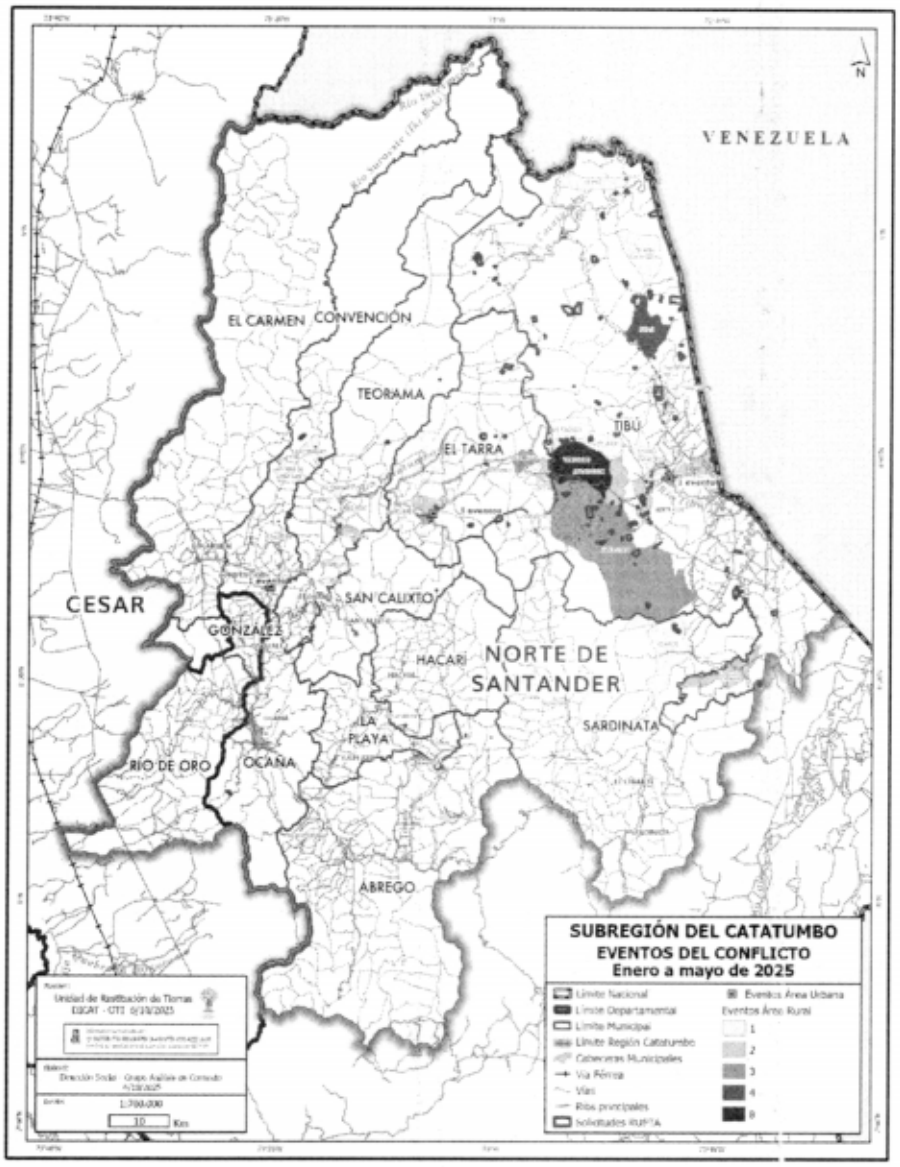
Fuente: Elaboración propia (Tabla 5)

Las veredas más afectadas con eventos del conflicto fueron las siguientes: Versalles, Tibú (8); Km 28/25, Tibú (4), San Pablo, Teorama (3), Área Libre/Guachimán, Tibú (3) y la vereda Filogringo del municipio de El Tarra (3). Al visualizar la cartografía de dichos eventos a nivel veredal podemos evidenciar la acuciante convergencia espacial entre los territorios más afectados por la violencia intensiva y generalizada asociada al recrudecimiento del conflicto

[36] Ibid.

[37] Infobae, *Gobierno acordó concentración temporal del Frente 33 mientras crece la tensión armada con el ELN en el Catatumbo*, junio 2025. Recuperado en: https://www.infobae.com/colombia/2025/06/03/gobierno-acuerda-concentracion-temporal-del-frente-33-en-medio-de-creciente-tension-armada-con-el-eln-en-el-catatumbo/

armado en el Catatumbo y las solicitudes de protección RUPTA allegadas a la URT y que pueden ser georrefenciadas al contar con un polígono preliminar identificable:



M apa 15. *Eventos del conflicto en el marco de la crisis humanitaria por veredas del Catatumbo (enero a mayo 2025)*

Fuente: Dirección Social, URT (2025) con base en Tabla 5 (Elaboración propia)

Se evidencia una concentración muy importante de dinámicas armadas en las veredas del centro y suroccidente del municipio de Tibú, lo que coincide con un clúster de ID que se localizan en las veredas Versalles, Miramonte, Área Libre/Guachimán, 20 de Julio y la Angalia. Estos se encuentran estratégicamente ubicadas en el entrecruce las vías que conducen de Tibú a Cúcuta y de Tibú a El Tarra. También es llamativo señalar que alrededor de la vereda Km 28/25 se encuentra otro núcleo importante de solicitudes de protección, las que seguro fueron presentadas debido a los fuertes combates que se han registrado en el área.

Es esa zona en la que se encuentran, tanto la mayor concentración geográfica de solicitudes de protección RUPTA con polígono preliminar, como la de eventos de conflicto armado. En otras palabras, los territorios con mayor

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
DOCUMENTAL
Dirección Territorial
Norte de Santander - Cúcuta

intensidad de dinámicas de violencia producto del conflicto armado recrudecido en el Catatumbo son aquellos en los que se concentran o se distribuyen a su alrededor la mayoría de las solicitudes de protección RUPTA allegadas a la URT por los presuntos hechos de abandono forzado y/o despojo de tierras ocurridos durante la crisis humanitaria del primer semestre de 2025 experimentada en la región.

1. **Temporalidad en la presentación de la solicitud.**

El artículo 33 A de la Ley 387 de 1997 determinó en su inciso primero que la inscripción en el Rupta procede de oficio o a solicitud de parte, siempre que se realice dentro de los dos (2) años siguientes al hecho victimizante, salvo fuerza mayor o caso fortuito[38].

En ese sentido, el artículo 2.15.6.2.1 del Decreto 1071 de 2015 estableció como requisito para las solicitudes de inscripción en su numeral 1, que estas deben ser presentadas dentro de los dos (2) años siguientes al hecho victimizante, salvo fuerza mayor o caso fortuito, conforme a lo descrito en el artículo 84 de la Ley 1955 de 2019, el cual agregó el artículo 33 A en la Ley 387 de 1997.

De manera armónica, el numeral 3 del precitado artículo 2.15.6.2.7 del Decreto 1071 de 2015, prescribió como requisito para decidir la procedencia de la solicitud, haber acreditado que esta o el procedimiento iniciado de oficio, se realizó dentro de los dos (2) años establecidos en el referido artículo 33 A de la Ley 387 de 1997, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

De este modo, el requisito de temporalidad contemplado para los procedimientos de inscripción en el Rupta en la normativa vigente se constituye en el primer criterio de validación, toda vez que, de no cumplirse con este, no sería procedente analizar los demás requisitos en términos de eficiencia, eficacia, celeridad y economía de la administración pública.

Al respecto, se pudo identificar en la información obrante en el expediente del ID 1127116, que el señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, presentó solicitud de inscripción en el Rupta el 12 de febrero de 2025, asociada al número interno de identificación (ID) 1127116, respecto del predio denominado **PARCELA**, ubicado en la vereda las palmas del municipio de TIBU, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**, sin folio de matrícula inmobiliaria y sin número predial asociado, frente a presuntos hechos de desplazamiento forzado ocurridos el 1 de febrero de 2025.

De acuerdo con el material probatorio recaudado, se pudo establecer que los hechos referidos por el señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, tuvieron lugar en el marco de la emergencia humanitaria de enero de 2025, tal como se extrae de su declaración la cual señala que:

> *"**La abogada le pregunta** ¿Ha declarado ante alguna autoridad competente sobre su condición de víctima? **Responde:** Sí, he declarado en la Unidad de Restitución de Tierras, pero no recuerdo la entidad exacta.."*[39]

[38] Código Civil Colombiano. ARTICULO 64. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.

39 ID de documento 6151912 del SRTDAF

Que conforme consulta en la plataforma VIVANTO del 29 de abril de 202640, se pudo establecer que del señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, reposa los siguientes hechos victimizantes en su registro:

- Hecho victimizante: Desplazamiento forzado, declaración N° 3631087, victima directa **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, de encuentra incluido por hechos ocurridos el 08 de marzo de 2019 declaración realizada en el Municipio de Cucuta
- Hecho victimizante: Desplazamiento forzado, declaración N° 811594, victima directa **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, de encuentra incluido por hechos ocurridos el 17 de diciembre de 1996 en el municipio de Pelaya.
- Hecho victimizante: Homicidio, declaración N° 811595, victima directa **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, de encuentra incluido por hechos ocurridos el 17 de diciembre de 1996 en el municipio de Pelaya.
- Hecho victimizante: Desplazamiento forzado, declaración N° 3973702, victima directa **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, de encuentra incluido por hechos ocurridos el 19 de enero de 2025 en el municipio de Tibu.41

En ese sentido, se observa que entre la fecha de ocurrencia de los hechos victimizantes que motivan la solicitud de inscripción se cuenta de enero de 2025 y la de presentación de la solicitud 1 de febrero de 2025, existe una diferencia de menos de un mes, lo que permite concluir que se cumple con el requisito de haberse presentado el requerimiento dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de las circunstancias de desplazamiento forzado, por lo que procede continuar con el estudio de los demás criterios establecidos por la normativa vigente.

De acuerdo con lo anterior, se encuentra entonces acreditado en el expediente la existencia de fuerza mayor o caso fortuito, por lo que procede continuar con el estudio de los demás criterios establecidos por la normativa vigente.

2. Relación jurídica con el predio objeto de la medida.

Sea lo primero precisar que el artículo 2.15.6.1.1 del Decreto 1071 de 2015 estableció que a través del Rupta se protegen las relaciones de propiedad, posesión y ocupación de las personas víctimas de desplazamiento forzado, respecto de sus predios. En ese sentido, para acceder a la inscripción en este registro se debe acreditar alguna de estas calidades, las cuales determinan los efectos de la medida, tal como lo prescribe la referida norma:

> *"Adquirí el predio hace cinco meses, en noviembre de 2024."42*

Ahora bien, al momento de presentar la solicitud de inscripción en el Rupta respecto del predio denominado **PARCELA**, ubicado en la vereda las palmas del municipio de TIBU, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**, sin folio de matrícula inmobiliaria y sin número predial asociado. el señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, indicó que ostentaba la calidad jurídica de propietario, sin aportar documentación, sin embargo, bajo su manifestación señala que:

---

40 ID de documento 6716356 del SRTDAF

41 ID de documento 6716356 del SRTDAF

42 ID de documento 6151912 del SRTDAF

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
VERSIÓN DOCUMENTAL
Dirección Territorial Norte de Santander - Cúcuta

*"La abogada le pregunta: **¿Cómo adquirió el predio y tiene documentos de propiedad?** Responde: Adquirí el predio hace cinco meses, en noviembre de 2024, mediante un acuerdo de destrazamiento, y no tengo documentos legales de la propiedad. l"*[43]

Con el objetivo de identificar la calidad jurídica que ostenta el señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya frente al predio objeto del procedimiento de inscripción en el Rupta, la Dirección Territorial Norte de Santander recaudó los siguientes elementos materiales de prueba:

1. Consulta en la plataforma de la Superintendencia de Notariado y Registro, por medio del Nodo de Tierras, bajo el criterio de búsqueda por índice de propietarios a nombre del señor **JOSE ASDRUBAL SALAZAR LAZARO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.502.417 de Cúcuta[44]
2. Acta de localización predial elaborado por parte del área catastral de la UAEGRTDAF el predio denominado **PARCELA**, ubicado en la vereda las palmas del municipio de TIBU, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**[45]

De acuerdo con lo anterior, se pudo establecer que:

a) El señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya inició el vínculo con el predio objeto de la solicitud a partir del año 2024 aproximadamente, según lo expresado al interior de la declaración de hechos rendida por el solicitante; ahora bien, una vez analizado en conjunto las pruebas incorporados al presente proceso administrativo entre ellas la ubicación preliminar del predio objeto de estudio se determinó que dicho predio no cuenta con información registral y/o cédula catastral, por lo que se permite concluir que el señor QUINTERO SERRANO, ostenta la calidad de Ocupante frente al predio objeto de la presente solicitud.
b) Al respecto, no se pudo identificar que el predio objeto de la solicitud se asocie a un folio de matrícula inmobiliaria magnético o del antiguo sistema, por lo que es posible inferir la carencia de antecedentes registrales, y, por ende, presumir que el inmueble objeto de la solicitud es presuntamente baldío.

Con base en los elementos de prueba y el análisis realizado, es posible inferir razonablemente que el señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, ostenta la calidad jurídica de ocupante respecto del predio objeto de la solicitud, encontrándose acreditado el primer requisito del artículo 2.15.6.2.7 del Decreto 1071 de 2015.

3. Condición de víctima de desplazamiento forzado.

Este requisito del artículo 2.15.6.2.7 del Decreto 1071 de 2015 hace referencia a la acreditación de la condición de víctima de desplazamiento forzado, para lo cual refiere la definición del artículo 1 de la Ley 387 de 1997 que señala lo siguiente:

ARTICULO 1o. DEL DESPLAZADO. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y

43 ID de documento 6151912 del SRTDAF

44 ID de documento 6723369 del SRTDAF

45 ID de documento 6742562 del SRTDAF

tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.

Adicionalmente, con fines orientadores frente a la calidad de víctimas de desplazamiento forzado, el artículo 2.2.11.1.1 del Decreto 1084 de 2015, compiló el artículo 2 del Decreto 2569 del 2000, que reglamentó el artículo 1 de la Ley 387 de 1997, reproduciendo la misma definición.

De suyo, el artículo 60 de la Ley 1448 de 2011, al abordar lo correspondiente al desplazamiento forzado, refirió que la atención de la población víctima de este tipo de hechos se adelantaría con base en lo dispuesto en dicha norma y de manera complementaria con lo establecido en la Ley 387 de 1997, planteando una armonía en la normativa vigente sobre el asunto.

Ahora bien, frente al caso concreto la Dirección Territorial Norte de Santander recopiló el siguiente material probatorio que permite establecer la calidad de víctima de desplazamiento forzado del señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya como se expone a continuación:

Que conforme consulta en la plataforma VIVANTO del 29 de abril de 202646, se pudo establecer que del señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, reposa los siguientes hechos victimizantes en su registro:

- Hecho victimizante: Desplazamiento forzado, declaración N° 3631087, victima directa **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, de encuentra incluido por hechos ocurridos el 08 de marzo de 2019 declaración realizada en el Municipio de Cucuta
- Hecho victimizante: Desplazamiento forzado, declaración N° 811594, victima directa **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, de encuentra incluido por hechos ocurridos el 17 de diciembre de 1996 en el municipio de Pelaya.
- Hecho victimizante: Homicidio, declaración N° 811595, victima directa **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, de encuentra incluido por hechos ocurridos el 17 de diciembre de 1996 en el municipio de Pelaya.
- Hecho victimizante: Desplazamiento forzado, declaración N° 3973702, victima directa **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, de encuentra incluido por hechos ocurridos el 19 de enero de 2025 en el municipio de Tibu.47

Conforme ampliación rendida ante la unidad de restitución de tierras a los 29 días del mes de octubre de 2025, señalo el señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** en cuanto al inicio de la relación jurídica de la siguiente forma:

> "La abogada le pregunta ¿Cuál es el motivo para iniciar este proceso de restitución? Responde: Porque mi predio está abandonado, me han amenazado, y me dijeron que no regrese. ¿En qué condiciones dejó el predio? Responde: Lo dejé en buenas condiciones, con cuatro hectáreas sembradas de plátano, maíz y yuca, además de animales que perdí por el desplazamiento.."48

---

46 ID de documento 6716356 del SRTDAF

47 ID de documento 6716356 del SRTDAF

48 ID de documento 6151912 del SRTDAF

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
GESTIÓN DOCUMENTAL
Dirección Territorial Norte de Santander - Cúcuta

De acuerdo con lo anteriormente descrito, se concluye que dentro del procedimiento de inscripción en el Rupta que se adelanta, se acreditó la condición de víctima de desplazamiento forzado el señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, en los términos del artículo 1 de la Ley 387 de 1997, por lo que resta presentar la identificación del predio sobre el cual recaerá la medida de protección.

4. Identificación del predio.

Con el objetivo de dar cumplimiento al numeral 4 del artículo 2.15.6.2.7 del Decreto 1071 de 2015, la Dirección Territorial Norte de Santander adelantó las siguientes actividades tendientes a la identificación del predio objeto de la solicitud:

a. Acta de localización predial elaborado por parte del área catastral de la UAEGRTDAF el predio denominado **PARCELA**, ubicado en la vereda las palmas del municipio de TIBU, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**[49]

Conforme a lo referido, se recabaron los siguientes datos de identificación del inmueble:

Departamento	Norte de Santander
Municipio	Tibú
Vereda/Corregimiento	Tibú
Nombre/Dirección del predio	**PARCELA**
No. Folio de matrícula inmobiliaria	Sin folio de matrícula inmobiliaria asociado
Número predial	Sin número predial asociado
Tipo de predio	Urbano
Área de predio	15 Htas
Calidad jurídica de la persona solicitante frente al predio	Ocupación
Porcentaje del derecho respecto del predio	100%

De acuerdo con el estudio realizado, se declarará procedente la inscripción en el Rupta frente a la medida de protección en favor del señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No.

49 ID de documento 6742562 del SRTDAF

12.500.468 de Pelaya, en calidad de ocupante, respecto del 100% del cual es titular, de acuerdo con la acreditación de los requisitos normativos que se analizaron en líneas precedentes.

Como se pudo observar, el predio objeto de la solicitud no se encuentra asociado a un número de folio de matrícula inmobiliaria y dentro de los estudios realizados para la identificación del predio y la calidad jurídica de la persona solicitante, tampoco se identificó la existencia de antecedentes registrales de dominio pleno en el antiguo sistema registral.

Frente a la carencia de antecedentes registrales, es posible inferir razonablemente que el predio objeto de la solicitud puede ser de naturaleza baldía, tal como lo ha determinado la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos[50], llegando a la siguiente conclusión:

> *"En tal sentido, los artículos 1 y 2 de la Ley 200 de 1936 no entran en contradicción directa con las referidas normas del Código Civil, el Código Fiscal, el Código General del Proceso, la Ley 160 de 1994 y la Constitución Nacional, ya que al leerse en conjunto se descubre que el conflicto entre estas es apenas aparente. Lo anterior, debido a que la presunción de bien privado se da ante la explotación económica que realiza un poseedor, y, como se observó, en lo que se refiere a los bienes baldíos no se puede generar la figura de la posesión sino de la mera ocupación.*
>
> *Por lo anterior, no se puede concluir que una norma implique la derogatoria de la otra o su inaplicación, sino que se debe comprender que regulan situaciones jurídicas diferentes y que deben ser usadas por el operador jurídico según el caso. Es por ello que el legislador, de forma adecuada, previó cualquiera de estas situaciones en el Código General del Proceso, brindándole al juez que conoce del proceso de pertenencia las herramientas interpretativas para resolver el aparente conflicto normativo, así como las herramientas probatorias para llevar a una buena valoración de la situación fáctica.* ***Reconociendo, sin lugar a dudas, que en todos los casos en los que no exista propietario registrado en la matrícula de un bien inmueble, debe presumirse que este es un bien baldío****.*
>
> *En conclusión, el juez debe llevar a cabo una interpretación armónica de las diferentes normas existentes en torno a tan específico asunto, tales como los artículos 1º de la Ley 200 de 1936; 65 de la Ley 160 de 1994, 675 del Código Civil, y 63 de la Constitución Política, sin desconocer que existe una presunción iuris tantum en relación con la naturaleza de bien baldío, ante la ausencia de propietario privado registrado, pues tal desconocimiento lo puede llevar a incurrir en un defecto sustantivo por aplicar una regla de manera manifiestamente errada, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable.[51]"* (Negrilla fuera de texto).

Con la información disponible en las fuentes institucionales y las diligencias de localización preliminar realizadas con la persona solicitante, se pudo construir el siguiente polígono aproximado del inmueble:

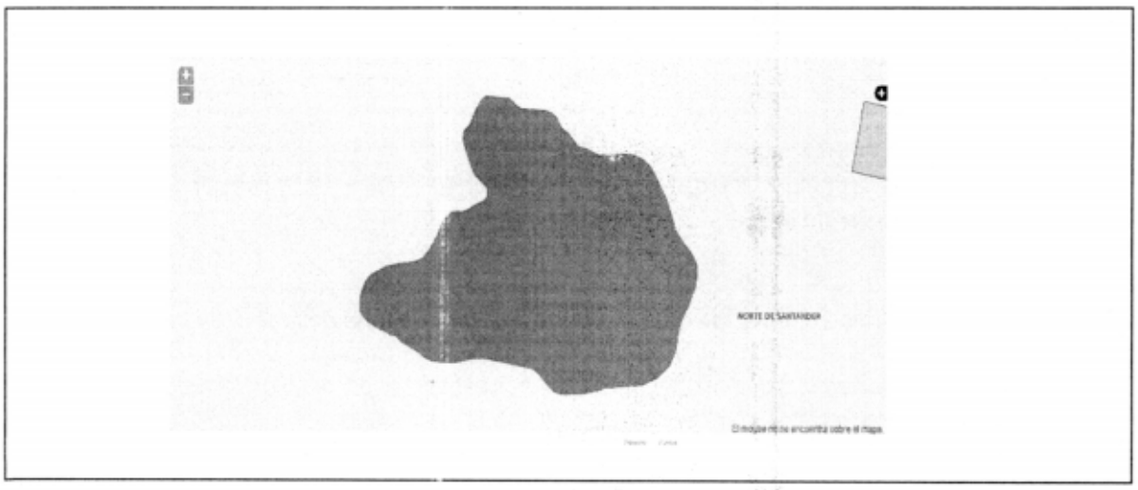
---

[50] Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional T-488 de 2014, T-293 de 2016, T-461 de 2016, T-548 de 2016, T-549 de 2016 y T-407 de 2017. Págs. 37-38.

[51] Corte Constitucional de Colombia, Sala Sexta de Revisión, Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio, Sentencia T-549 de 2016.

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
GESTIÓN DOCUMENTAL
Dirección Territorial
Norte de Santander - Cúcuta

Imagen 1. Polígono aproximado del predio objeto de la solicitud



Fuente: Área Catastral y de Análisis Territorial – Dirección Territorial Norte de Santander - Unidad de Restitución de Tierras

De esta forma, por tratarse de un predio presuntamente baldío, se deberá dar aplicación a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 2.15.6.1.1 del Decreto 1071 de 2015, esto es, ordenar la comunicación de la decisión a la Agencia Nacional de Tierras para que adelante los trámites de su competencia, incluyendo el inicio oficioso del proceso de apertura de folio de matrícula inmobiliaria previsto en el artículo 2.2.6.16.2 del Decreto 1069 de 2015[52] respecto del predio objeto de la solicitud; de modo que una vez realizada la apertura se pueda proceder con la inscripción de la anotación de la medida de protección del Rupta, situación que quedará en efecto suspensivo, sujeto a la recepción de la respuesta frente a la efectiva apertura del folio referido.

Sumado a lo anterior y conforme a lo informado por la solicitante y el polígono de ubicación preliminar[53] incorporado en el expediente, se puede concluir que el predio objeto de la solicitud de inscripción de la medida de protección es presuntamente baldío.

En ese sentido, la UAEGRTD procederá a realizar la inscripción el predio identificado **PARCELA**, ubicado en la vereda las palmas del municipio de TIBU, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**, sin folio de matrícula inmobiliaria y sin número predial asociado a nombre del señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya en calidad de presunto ocupante, por lo cual, se hace necesaria la comunicación a la Agencia Nacional de Tierras para que, en virtud de lo previsto en los artículos 2.2.6.15.2. y 2.2.6.15.4 del Decreto 1069 de 2015, inicie las actuaciones administrativas de su competencia funcional para la apertura del folio de matrícula inmobiliaria del predio presuntamente baldío inscrito en el RUPTA, a saber:

[52] ARTÍCULO 2.2.6.16.2. Inicio. Una vez el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER o quien haga sus veces, en el desarrollo de sus funciones misionales o por comunicación de autoridad administrativa o judicial, identifique tierras posiblemente baldías, mediante acto administrativo de trámite dará inicio oficiosamente a la actuación administrativa para la apertura de folio de matrícula inmobiliaria de bienes baldíos a nombre de la Nación.
Este acto administrativo se comunicará, dentro de los diez (10) días siguientes a su expedición, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011. (Subrayado fuera de texto).

[53] ARTÍCULO 2.15.6.2.7. Requisitos de procedencia de inscripción. La inscripción en el Rupta procederá siempre que se cumplan los siguientes criterios: (...) PARÁGRAFO 2. Cuando el predio sea un baldío, bastará con el polígono de ubicación preliminar, establecido a partir de la información proporcionada por el solicitante o las fuentes institucionales.

> *"**ARTÍCULO 2.2.6.15.2. Inicio**. Una vez el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) o quien haga sus veces, en el desarrollo de sus funciones misionales o por comunicación de autoridad administrativa o judicial, identifique tierras posiblemente baldías, mediante acto administrativo de trámite dará inicio oficiosamente a la actuación administrativa para la apertura de folio de matrícula inmobiliaria de bienes baldíos a nombre de la Nación.*
>
> *Este acto administrativo se comunicará, dentro de los diez (10) días siguientes a su expedición, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.*
> *(...)*
>
> ***ARTÍCULO 2.2.6.15.4. Acto administrativo que ordena apertura de folio de matrícula inmobiliaria**. Una vez los predios objeto de apertura de matrícula inmobiliaria se encuentren debidamente identificados e individualizados y que, de conformidad con las certificaciones expedidas por la autoridad catastral y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, se encuentre descartado el ejercicio de derechos reales sobre estos bienes, el INCODER, o quien haga sus veces, proferirá acto administrativo que ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, la apertura de la matrícula inmobiliaria como predios baldíos de propiedad de la Nación, y ordenará su inscripción en el respectivo folio a nombre de la Nación-INCODER o quien haga sus veces.*
>
> *PARÁGRAFO. En los casos en que la administración del baldío, por disposición legal, recaiga en cabeza de otra entidad pública, se realizará además la respectiva inscripción a su favor, de acuerdo al acto administrativo que esta entidad emita."* (Se enfatiza)

Es importante señalar que la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, en Auto de Seguimiento 859 de 2022, reconoció la insuficiencia del indicador de protección de tierras respecto de predios baldíos y ordenó al Gobierno Nacional formular un indicador complementario que dé cuenta de la materialización de las medidas de protección de baldíos comunicadas oficialmente a la Agencia Nacional de Tierras, precisando que la finalidad de la medida es prevenir que la Agencia Nacional de Tierras titule el predio presuntamente baldío a persona diferente a la que lo explota:

> *"48. Ahora bien, esta Corporación ha indicado que la finalidad de la medida de protección es "evitar la enajenación, destrucción o usos ilegales" de las tierras que sean despojadas o abandonadas [98]. No obstante, la Sala ha reconocido las serias dificultades que se presentan para materializar las medidas de protección sobre la ocupación de bienes baldíos carentes de identificación catastral. En tal sentido, la cuantificación de las medidas de protección que se gestionan para evitar que la Agencia Nacional de Tierras titule predios a una persona distinta a quien la explotaba resulta necesaria en el marco de la valoración de la superación del ECI en materia de protección de tierras. En virtud de lo anterior, el Auto 331 de 2019 incluyó dentro de los titulares del derecho a las personas que explotan económicamente los bienes baldíos, con el fin de que la referida Agencia evite la titulación de aquellos a personas distintas, sin valorar la situación de la persona despojada o que abandonó forzosamente [100]. Así, la Sala encuentra acreditada la insuficiencia del indicador por no dar cuenta de las medidas de protección dirigidas a los bienes baldíos."* (Se enfatiza)

5. Articulación con el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF)

El artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 creó el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) como un instrumento que sirve para la política de restitución de tierras, donde como requisito previo para elevar la solicitud ante los jueces especializados en restitución de tierras, se deben inscribir las personas que fueron

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
DOCUMENTAL
Dirección Territorial
Norte de Santander - Cúcuta

despojadas de sus inmuebles u obligadas a abandonarlos y su relación jurídica con estos, determinando con precisión los predios objeto de despojo, en forma preferente mediante georreferenciación, así como el período durante el cual se ejerció influencia armada en relación con el predio.

De acuerdo con el referido artículo, la inscripción en el RTDAF procede por solicitud del interesado, o de oficio por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, como entidad administradora de ese registro.

El artículo 2.15.6.1.2 del Decreto 1071 de 2015 al referir la articulación entre el Rupta y el RTDAF señaló que, las medidas de protección del Rupta pueden recaer sobre predios ubicados dentro o fuera de las zonas microfocalizadas con fines de restitución de tierras.

Adicionalmente, dicha norma indicó que cuando se disponga la protección de predios a través de su inscripción en el Rupta y se identifique que la persona solicitante reúne preliminarmente los requisitos que exige la Ley 1448 de 2011 para reclamar la restitución de tierras, en aplicación de lo descrito en el artículo 76 de la mencionada normativa, deberá iniciarse de oficio el procedimiento de restitución de tierras dentro del término de vigencia de la mencionada ley.

En ese sentido, dado que en el presente caso se declarará procedente la inscripción en el Rupta, resulta igualmente relevante realizar el análisis preliminar frente a la pertinencia de ordenar el inicio de oficio del procedimiento de inscripción en el RTDAF.

De conformidad con el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, son titulares del derecho a la restitución de tierras *"las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley, entre el 1o de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos establecidos en este capítulo."*

Asimismo, conviene destacar lo referido por el artículo 81 de la Ley 1448 de 2011, el cual indicó que son titulares de la acción de restitución de tierras:

> *"Las personas a que hace referencia el artículo 75.*
> *Su cónyuge o compañero o compañera permanente con quien se conviva al momento en que ocurrieron los hechos o amenazas que llevaron al despojo o al abandono forzado, según el caso.*
> *Cuando el despojado, o su cónyuge o compañero o compañera permanente hubieran fallecido, o estuvieren desaparecidos podrán iniciar la acción los llamados a sucederlos, de conformidad con el Código Civil, y en relación con el cónyuge o el compañero o compañera permanente se tendrá en cuenta la convivencia marital o de hecho al momento en que ocurrieron los hechos.*
> *En los casos contemplados en el numeral anterior, cuando los llamados a sucederlos sean menores de edad o personas incapaces, o estos vivieran con el despojado y dependieran económicamente de este, al momento de la victimización, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas actuará en su nombre y a su favor.*
> *Los titulares de la acción podrán solicitar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas que ejerza la acción en su nombre y a su favor."*

De acuerdo con lo descrito, es posible inferir razonablemente que el señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, reúne preliminarmente los atributos para ser titular del derecho de restitución de tierras debido y que de acuerdo al material preliminar descrito en la presente solicitud se identifican elementos facticos y jurídicos que puedan determinar el inicio de oficio del procedimiento administrativo de protección del derecho de restitución de tierras.

Por estas razones, se ordenará la creación de un nuevo ID en el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, con el objetivo de iniciar oficiosamente el procedimiento de inscripción en el RTDAF, respecto el señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, en relación con el predio frente al cual se ordenará la inscripción en el Rupta.

Adicionalmente, debido a que el caso *sub examine* corresponde con un procedimiento iniciado de manera oficiosa, se deberá dar cumplimiento a lo previsto en el inciso cuarto del artículo 2.15.6.1.6 del Decreto 1071 de 2015, que señala que esta medida tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de su adopción. Al finalizar este plazo, la entidad administradora del Rupta podrá decretar su cancelación sin que medie solicitud de parte, siempre que las causas que la originaron hubiesen cesado. En todo caso, la persona beneficiaria de la medida podrá requerir que esta permanezca en vigor, para lo cual deberá acreditar nuevamente los requisitos de la inscripción.

Asimismo, conforme al parágrafo del artículo 2.15.6.1.6 del Decreto 1071 de 2015, la presente decisión deberá ser comunicada a través de la página web de la entidad y mediante un medio de comunicación masivo del orden nacional y local.

En atención a lo expuesto, el Director Territorial de Norte de Santander de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,

RESUELVE:

PRIMERO: **DECLARAR** procedente la inscripción en el Rupta el señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya, asociado al ID **1127116**, respecto de la totalidad de la cual es titular frente al predio denominado **PARCELA**, ubicado en la vereda las palmas del municipio de TIBU, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**, sin folio de matrícula inmobiliaria y sin número predial asociado, en calidad de presunto ocupante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

SEGUNDO: COMUNICAR de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuatro del artículo 2.15.6.1.1 del Decreto 1071 de 2015, la decisión adoptada mediante el presente acto administrativo a la Agencia Nacional de Tierras, para que la tenga como insumo y adelante los trámites de su competencia, incluyendo el inicio oficioso del proceso de apertura de folio de matrícula inmobiliaria previsto en el artículo 2.2.6.16.2 del Decreto 1069 de 2015 respecto del predio identificado en el numeral primero del presente acto administrativo, con el objetivo de inscribir la anotación de inscripción en el Rupta correspondiente, para lo cual se exhorta a la referida entidad a informar la decisión que adopte frente a la referida apertura.

TERCERO: COMUNICAR la decisión adoptada mediante el presente acto administrativo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del círculo registral de Pelaya, para que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1579 de 2012, adelante el proceso de registro de la anotación de inscripción en el Rupta en el término de cinco (5) días contados a partir del recibo de la correspondiente comunicación, dando aplicación al código ***0927*** *"Predio declarado en abandono por poseedor u ocupante"*, respecto del predio identificado en el numeral primero del presente acto administrativo. Para el cumplimiento de esta orden, previamente deberá contarse con la respuesta de la Agencia Nacional de Tierras respecto de la efectiva apertura del folio de matrícula inmobiliaria respectivo.

GESTIÓN DOCUMENTAL
Dirección Territorial
Norte de Santander - Cúcuta
UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

CUARTO: ORDENAR al área de atención al público de la Dirección Territorial Norte de Santander, la creación de un nuevo ID en favor del señor **HUMBERTO QUINTERO SERRANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.500.468 de Pelaya en relación con el predio frente al cual se decretó la inscripción en el Rupta, con el objetivo de iniciar de oficio el procedimiento de inscripción en el RTDAF, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.15.6.1.2 del Decreto 1071 de 2015, y lo descrito en la parte motiva del presente.

QUINTO: NOTIFICAR la presente resolución a la persona beneficiaria de la medida, su representante o apoderado, de conformidad con lo establecido en el Capítulo V del Título III de la Parte I de la Ley 1437 de 2011, concordante con el artículo 2.15.6.2.9 del Decreto 1071 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

SEXTO: PUBLICAR el sentido de la decisión adoptada mediante el presente acto administrativo, en la página web de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 2.15.6.2.9 del Decreto 1071 de 2015. De igual manera, conforme a la norma referida, se entenderá que la publicidad frente a terceros fue realizada con la anotación registral correspondiente en el folio de matrícula inmobiliaria del predio identificado en el numeral primero del presente acto administrativo.

SEPTIMO: INFORMAR que contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a esta, ante el funcionario que profirió la decisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 de la Ley 1437 de 2011 y 2.15.6.2.9 del Decreto 1071 de 2015. Para estos fines, podrá radicarse el recurso en cualquiera de las sedes de la Unidad de Restitución de Tierras.

OCTAVO: ARCHIVAR las diligencias una vez el presente acto administrativo se encuentre ejecutoriado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San José de Cúcuta, a los cinco (05) días, del mes de junio de 2026.

MAURICIO JESUS CARREÑO JACOME
DIRECTOR TERRITORIAL DE NORTE DE SANTANDER
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

Proyectó: Jonathan Leonardo Diaz Quintero – Abogado Sustanciador -Rupta. - Dirección Territorial Norte de Santander
Revisó: Mónica Andrea Zabala Cuervo- Líder Equipo Rupta – DT Norte de Santander

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
GESTIÓN DOCUMENTAL
Dirección Territorial Norte de Santander - Cúcuta